

ESPAÑA Y SU DEFENSA
1994: El aumento de la
vulnerabilidad

RAFAEL L. BARDAJÍ
IGNACIO COSIDÓ

INCIPE

1994

Las publicaciones del Incipe no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior ni de sus patrocinadores.

ESPAÑA Y SU DEFENSA

1994: El aumento de la vulnerabilidad

RAFAEL L. BARDAJÍ
IGNACIO COSIDÓ

INCIPE

Madrid, junio de 1994

El Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) es una fundación cultural privada sin finalidad de lucro reconocida por el Ministerio de Cultura.

En 1993 recibió aportaciones económicas de las siguientes entidades: Argentaria, Banco Central Hispano, Fundación BBV, Iberia, Instituto Nacional de Industria, Repsol y Telefónica. El INCIPE recibe además ayuda desinteresada de otras entidades públicas y privadas y personas individuales.

Edita el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior

Almirante 30, 28004 Madrid. Teléfonos: 532 66 61 y 522 77 50. Fax: 532 96 28

Maquetación y composición: microPrint Ibérica

Los Autores

Rafael Bardají

Los autores quieren agradecer a Manuel Coma y a Florentino Portero sus comentarios y ayuda durante la elaboración de este trabajo.

Índice

Prólogo

I. La gloria y el precio de estar en Bosnia

II. La evolución del entorno estratégico

III. La defensa española en 1994

1. La caída de la operatividad

2. La disminución de los recursos

3. Las adquisiciones de material

4. El factor humano

5. La industria de la defensa

IV. Compromisos por encima de las posibilidades

VI. El 'estiramiento estratégico'

Prólogo

España no se ha caracterizado por prestarle gran atención a su defensa. En los años de Franco, nuestras fuerzas armadas, a pesar de la ayuda americana, estaban mal dotadas y sufrían de una fuerte macrocefalia sólo compensada por el honor de ser un oficial de carrera.

Afortunadamente, los ejércitos de la España de Franco tenían que hacer frente a escasos retos internacionales dada la marginación política de nuestra nación. Los pocos empeños nacionales -Ifni, el Sáhara- fueron resueltos aceleradamente, mientras que las grandes amenazas del Este quedaban cubiertas por el esfuerzo colectivo de los miembros de la OTAN. Nuestra contribución a la seguridad occidental pasaba por la utilización estadounidense de las bases y no por una intervención directa. Por eso resultaba estratégicamente irrelevante la penuria de nuestros militares.

La democracia no trajo una nueva reflexión sobre el estado y el papel de las fuerzas armadas españolas, tan sólo se preocuparon los primeros gobiernos en dar respuesta al "problema militar", esto es, al control político de los militares. Esta tarea empeñó a varios ministros de la UCD, aunque hay que reconocer que fue culminada por Narcis Serra gracias a su política del palo y la zanahoria: mientras que se imponía con su autoridad, a los altos mandos y oficiales se les prometía la modernización de sus fuerzas así como su relativa normalización internacional vía la integración española en la OTAN, a pesar de las limitaciones derivadas del peculiar "modelo español".

Despejadas todas las dudas sobre la lealtad democrática de los mandos y garantizado el control gubernamental de la política militar, parecería que el Gobierno se desentiende de la defensa desde comienzos de los 90. Las fuerzas armadas ya no necesitan ni del palo ni del caramelo.

La gran paradoja, objeto de nuestro análisis en las páginas que siguen, es que ese abandono de los ejércitos -plasmado en el reducidísimo esfuerzo en defensa del gobierno- coincide temporalmente con el aumento de las demandas que se hacen a nuestros soldados: misiones de observación en Centroamérica, control de acuerdos de desarme en África, vigilancia de sucesivos embargos de Naciones Unidas contra Irak y la antigua Yugoslavia, escolta de la ayuda humanitaria y misiones de interposición en Bosnia y, posiblemente, presencia de paz en Oriente Medio. Amén de la creciente presencia en la OTAN y en la UEO y la asignación de importantes efectivos al eurocuerpo...

Disminución de recursos y aumento de las misiones. Y junto a esto, una estructura de fuerzas prácticamente inalterada en su organización a pesar de los cambios: mismo número de unidades, misma extracción de los soldados, la conscripción... Ya de por sí es milagroso que con la mitad de dinero pueda funcionar un ejército que tan sólo hace diez años gastaba el doble, algo más del 2 por ciento del PIB. Pero si, además, no sólo se le pide que sobreviva, sino que se comprometa en más y nuevas acciones, realmente se está pidiendo lo imposible.

La situación en 1994 es realmente tan mala, como expondremos a lo largo del texto, que no nos parece exagerado afirmar que nuestra defensa se encuentra al borde de la quiebra técnica, justo en un momento en el que las incertidumbres que pesan sobre nuestro entorno y el mundo vuelven más necesaria que nunca la capacidad de defendernos.

Es duro reconocer las deficiencias de uno mismo o admitir que no se puede cumplir con el cometido asignado. Pero volverse ciego ante la realidad sólo conduce a un gran engaño que, tarde o temprano, acaba por descubrirse, como pasó en la Unión Soviética. Nosotros estamos convencidos que para poner remedio a la situación dramática por la que atraviesa nuestra defensa hay que comenzar desvelando los problemas reales, no ocultarlos. Por eso no quisiéramos que se nos malinterpretara, particularmente por parte de quienes, día a día, se esfuercen en que su avión despegue, el embrague de su carro no se rompa, o que la nave surque las azules aguas.

Al preguntar hace unos pocos años al asesor para la Unión Soviética del Secretario General de la OTAN, sobre la situación en ese país nos contestó: ¿Y ustedes como creen que es la situación?. Mala, muy mala, dijimos al unísono. Y sonriendo nos repuso: No, en realidad es mucho peor.

Con el deseo de evitar que de lo malo se pase a lo peor hemos escrito estas páginas. Confiando que España, nuestra España, cuente con unas fuerzas armadas dignas, modernas y eficaces, a su servicio y en defensa de sus intereses.

I. LA GLORIA Y EL PRECIO DE ESTAR EN BOSNIA

A comienzos de Noviembre de 1992 partían del puerto andaluz de Málaga el grueso de los algo más de 700 hombres que formaban la llamada *Agrupación Táctica Málaga*. Su destino, el puerto croata de Split; y su misión, servir de escolta de los convoyes con ayuda humanitaria que la ONU estaba llevando a cabo en suelo de Bosnia-Herzegovina con el deseo de aliviar los dolores de la guerra civil que, con una crueldad inesperada, gangrenaba la antigua Yugoslavia.

No se trataba de la primera vez que militares españoles partían a tierras extrañas para realizar una misión. Observadores en distintos procesos de desarme habían prestado ya sus servicios a la ONU en Namibia, Angola, Honduras y El Salvador, entre otros lugares. Igualmente, España envió en 1990 una fragata y dos corbetas a la zona del Golfo Pérsico para garantizar el cumplimiento del embargo naval decretado por las Naciones Unidas sobre Iraq tras la invasión de Kuwait por ese país en Agosto de 1990.

Es más, con la derrota militar iraquí tras la intervención de la coalición internacional, España contribuyó, junto con otros socios de la Unión Europea Occidental y los EEUU, a la operación de auxilio del pueblo Kurdo, asediado por las tropas de Saddam Hussein en el norte montañoso y gélido de Irak. La operación *Provide Comfort*, cuya denominación castellanizada fue *Alfa-Kilo*, movilizó, por primera vez en la historia reciente de nuestra nación, a un nutrido contingente de soldados, más de 600 hombres, (la mayoría de ellos pertenecientes a la Brigada Paracaidista), algunos de ellos simples reclutas que se habían presentado voluntarios para la misión.

Los hombres de la *Agrupación Táctica Málaga* no eran, por tanto, los primeros militares españoles en realizar una misión fuera del suelo patrio. Sin embargo, hay que reconocer que su destacamento en Bosnia sí conllevaba importantes diferencias con las misiones realizadas hasta entonces por nuestras tropas, lo que explica la novedad, la relevancia y la simbología de este último envío.

En primer lugar, y a diferencia de anteriores misiones de observadores de la ONU realizadas por oficiales, esto es, por soldados profesionales de nuestras fuerzas armadas, los hombres que se aposentaban en la antigua Yugoslavia reunían a oficiales, suboficiales y tropa, todos voluntarios, lo que no disminuía ni la importancia ni el hecho de que soldados de reemplazo formasen parte de ese voluntariado.

En segundo lugar, a diferencia de los hombres que sirvieron en el norte de Iraq, cuyo papel esencial fue acondicionar tres campos de refugiados y prestar una vital ayuda hospitalaria gracias al escalón médico avanzado del Ejército de Tierra, los hombres en Bosnia debían prestar protección directa a los convoyes de la ONU sin que se estuviese completamente seguro de la aceptación de dicha misión por las partes beligerantes.

En tercer lugar, a diferencia del envío de los buques de

la Armada al Golfo, donde las lágrimas de familiares y amigos, el temor de otros y la crítica a la participación española en el embargo, llevaron a escenas patéticas e, incluso, a la no incorporación a sus unidades de unos pocos marineros, amparados por la cobertura política de Izquierda Unida y algunos medios de prensa que llamaban, sin más, a la desertión, la *Agrupación Táctica Málaga* partía siendo consciente del mayoritario respaldo de la opinión pública a la misión que iba a desempeñar. De hecho, muchas de las vacilaciones del Ministerio de Defensa acerca de la participación española en UNPROFOR se disiparon tras el horror público experimentado en el verano de 1992 al conocerse la existencia de campos de concentración, las violaciones masivas y la sistemática limpieza étnica.

Tal vez este tercer punto sea lo más destacable de todo. Nuestra *Agrupación*, tal y como se recalca desde la instancias oficiales, era una *fuerza de paz*, escudada en el color azul ONU de las boinas y cascos con los que se protegerían sus integrantes. Nadie, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad, concedió a nuestros marinos ese simbólico escudo en la intervención contra el villano Saddam. La guerra contra Iraq se libró con tropas de una coalición internacional con el beneplácito de ONU. En la antigua Yugoslavia la situación era distinta: eran tropas al servicio de las Naciones Unidas, eran "cascos azules". Como bien condensó el oficial superior de la *Agrupación Málaga*, el Coronel Zorzo, "no vamos a combatir. No vamos a participar en ninguna guerra. Sólo vamos a proteger convoyes de ayuda humanitaria."

En la opinión pública calaba la frase acuñada por los responsables del Ministerio de Defensa de "fuerzas españolas para la paz". Eslogan que a todos parecía beneficiar: Al gobierno y al Ministro de Defensa les daba una pieza importante para la justificación del gasto de defensa, aunque mínimo, siempre difícil de justificar; a los espantados ciudadanos les tranquilizaba tanto la naturaleza de la misión como el hecho mismo de que españoles estuviesen trabajando para acabar con la violencia de la guerra; y, por último, a los propios militares las misiones de paz y de ayuda humanitaria le servían tanto para ganarse a una opinión pública crítica y severa con las fuerzas armadas, lavándose, en cierta forma, la mala imagen de los últimos años, y, muy especialmente, como una palanca de fuerza ante el Gobierno frente a mayores recortes presupuestarios y reestructuraciones de fuerzas.

El resultado ha sido el florecimiento de una "cultura de la paz" en el estamento de la defensa cuyo impacto y relevancia ya hubieran querido para sí los vociferantes grupos pacifistas de los 80. La cultura de la paz orienta a nuestras fuerzas armadas a misiones de mantenimiento de la paz como realidad última de los ejércitos de final de siglo, permeando desde la enseñanza militar hasta la orgánica de las unidades. Al fin y al cabo ¿quién puede oponerse a la paz?

En realidad nadie. Sin embargo, por muy importante que sea

colaborar a apaciguar facciones en guerra, el mantenimiento y la imposición de la paz sólo pueden venir en un segundo plano tras la defensa de nuestro suelo y de nuestros intereses estratégicos. Porque sin eso, sin seguridad propia, malamente se podrá defender a los demás.

Es más, la habilidad o brillantez de nuestros cascos azules para ejecutar las misiones que se les han encomendado no puede hacernos olvidar lo que en verdad nos cuesta el mantenimiento de una misión de poco más de un millar de hombres. Cabe explicar que la *Agrupación Táctica Málaga* tardara más de seis meses en ponerse a punto para su envío a Bosnia por la inexperiencia en la formación de unidades para misiones de escolta. Pero el hecho de que el Ejército de Tierra haya tenido que echar mano de más de veinte unidades diferentes para agrupar cada uno de los contingentes destacados hasta la fecha no puede justificarse sólo por la voluntad de representar a todos los cuerpos, sino por la incapacidad de contar con una única unidad mayor al completo y preparada para ser enviada donde haga falta. De hecho, muchas de las dificultades para el cuarto relevo español vienen dadas por las carencias de tropas profesionales en número suficiente.

Esta cultura de la paz, además, no dice que para el sostenimiento de nuestros mil hombres en Bosnia el Ejército del Aire ha debido estirar al límite sus capacidades de transporte ni que buena parte del material de Tierra está siendo canibalizado para mantener operativo el despliegue en la zona.

Como tampoco se quiere recordar que cuando se habló a mediados de febrero del 94 de una retirada súbita de las tropas desplegadas en Bosnia ante lo que se consideraba un empeoramiento de la situación, la capacidad para evacuar a nuestros hombres dependía en buena medida de la cooperación de nuestros aliados. Baste recordar cómo con motivo del ultimátum de la OTAN a los bosnios-serbios que cercaban Sarajevo, el portaaviones *Príncipe de Asturias*, el medio esencial pensado para la evacuación, se encontraba fuera de servicio en plena revisión.

Al gobierno y a nuestros militares puede que le venga bien la presencia española en Bosnia, pero las Agrupaciones sólo son una cara de la misma moneda. Y la otra sólo enseña una profunda crisis militar en España, la falta de recursos y medios, la caída de operatividad general, la merma en el entrenamiento, la pobreza de pensamiento y el persistente rechazo al servicio militar obligatorio, independientemente del papel que han jugado, juegan y puedan jugar nuestros cascos azules.

La complacencia en las Fuerzas Armadas para la paz sólo puede conducir a unos ejércitos que puedan prestar unos limitados recursos a la ONU, unas cuantas unidades pintadas de blanco, a costa de la inoperancia de todo lo demás.

Si viviéramos en un universo kantiano de paz perpetua que nuestros vehículos cambiaran su camuflaje y se vistieran de blanco tal vez pudiera resultar aceptable. Pero la paz, como bien nos recuerdan, precisamente, la misión de la ONU, está

lejos de ser un bien extendido. Bien al contrario. Es más, en contra de las previsiones de hace tan sólo dos años, el ambiente internacional, nuestro ambiente estratégico, está evolucionando en una dirección poco tranquilizadora.

Por ello, es altamente loable intentar ayudar a los demás, pero si esta ayuda, como sucede en la actualidad, sólo es posible en detrimento de nuestras capacidades generales de defensa, hay que recordar que lo primero es lo primero y que la ayuda bien entendida comienza por uno mismo. Por eso, frente a la continua erosión de nuestras capacidades militares producto de la política del Gobierno socialista, la mejor contribución que el Gobierno español puede hacer a la paz comienza por evitar nuestra creciente vulnerabilidad y no por mostrar orgulloso a nuestros soldados allí donde le viene bien.

II. LA EVOLUCION DEL ENTORNO ESTRATEGICO

La caída del bloque soviético en 1989 y la posterior desaparición de la URSS en diciembre de 1991 eliminó, tras cuatro décadas de guerra fría, la amenaza militar directa que sufrían los aliados occidentales, especialmente en Europa. España, aunque alejada del Frente Central, también se benefició positivamente de los cambios en el Este, pues los planes operativos del Pacto de Varsovia contemplaban nuestro suelo como una parte más del teatro de operaciones de sus misiles, aviones y carros de combate.

Producto de esta relajación en el clima político-militar fueron los meses que prosiguieron a la caída del muro de Berlín, cuando al albor de las nuevas democracias en el Este surgieron todo tipo de teorías sobre la paz perpetua en el Viejo Continente. Los filósofos resucitaban a Kant mientras los políticos soñaban con los miles de millones detraídos de los gastos militares bajo la fórmula de los llamados "dividendos de la paz".

Cierto, la figura de Saddam Hussein tras su invasión de Kuwait en Agosto de 1990, ensombrecería de alguna manera la euforia de los europeos, muchos de los cuales se vieron obligados a destacar tropas al Golfo y luchar contra Iraq. Sin embargo, esa guerra fue episódica, una rara excepción alejada del corazón de la estabilidad y la seguridad, Europa. La desaparición de la URSS y las reformas avanzadas por el líder ruso, Boris Yeltsin, en su principal heredera, la Federación Rusa, no hacían sino ahondar en ese sentimiento de progresiva complacencia.

No obstante, el espejismo de la tranquilidad permanente se derrumbaría relativamente pronto: la guerra civil en la antigua Yugoslavia; luchas étnicas y tribales en las repúblicas salidas de la URSS; golpe de estado en Argelia; crisis económica aguda; terrorismo por doquier... De hecho, el prestigioso Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos de Londres, el IISS, decía en su informe anual que si en 1992 algo podía haber ido mal, había ido mal. Desde esa óptica, 1993 puede ser calificado como el año de Murphy: una mala situación tiende inexorablemente a empeorar.

Ahora bien, el hecho de que los datos sean fragmentados, que las situaciones afecten de desigual forma y con distinta intensidad a unos y otros, ha permitido la supervivencia de la idea de que el entorno estratégico en el que nos movemos es hoy más benigno que hace unos pocos años, restando importancia a los indicios de signo contrario. Sólo la idea de que vivimos en un mundo mejor puede justificar que el Gobierno español siga recortando en términos reales el dinero que se gasta en defensa. Sin embargo, una mirada a nuestro alrededor, nos ofrece otra visión del mundo.

En primer lugar nos encontramos con un doble fenómeno en Rusia: Por un lado, la erosión de la base política de las fuerzas reformadoras y del mismo presidente Yeltsin tras las elecciones de diciembre de 1993; y, por otro, con la preocupante utilización que el ejército ruso está haciendo de sus misiones de paz y de interposición para reconstituir

una suerte de espacio vital, próximo a sus fronteras, pero más allá de ellas, en el que se respete su voluntad y se vele por sus intereses.

Ciertamente, habrá quien no vea conexión negativa alguna entre la involución política en Moscú y la firmeza en la acción exterior rusa en su "extranjero cercano". Tal vez sea prematuro hablar de la reconstrucción de un cierto imperio post-soviético. Pero cabe recordar un hecho significativo: la Rusia débil de hoy ha conseguido algo que nunca logró la URSS poderosa de ayer, ejercer un veto efectivo sobre la decisión de la OTAN acerca de la incorporación de los países centroeuropeos, antiguos satélites del Kremlin.

Igualmente habrá a quien el tema de Rusia le parezca demasiado lejano o grande para España. Desgraciadamente, las fuerzas residuales rusas, esto es, lo que le correspondió como herencia de la URSS, pueden resultar tan destructivas que ni siquiera la Península Ibérica quedaría al margen de lo que con ellas Moscú hiciera. Bien por solidaridad y compromiso con el orden internacional, bien porque nos viéramos arrastrados a la vorágine de un conflicto. Sigue ostentando tanto poder militar Rusia que, en este terreno, poca diferencia hay respecto a la URSS. Sólo su naturaleza política es diferente. Y eso, está de nuevo cambiando.

En segundo lugar, los nacionalismos no se han acallado. Ciertamente, es posible que el ultimátum de la OTAN en torno a Sarajevo y que las acciones de castigo autorizadas por la ONU contra diversas posiciones de los serbios-bosnios en el cerco de Goradze lleven a pensar que el momento de los hipernacionalismos violentos están tocando su fin. Igual podría afirmarse de los conflictos étnicos que han sacudido durante 1992 y 1993 parte de la antigua Unión Soviética, particularmente en Georgia y en Armenia, lugares donde hoy las tropas rusas cumplen un papel de pacificadoras.

Sin embargo, a la vez que estos hipernacionalismos superviolentos y radicales han puesto en guardia a casi todos en contra de su barbarie, no es menos cierto que por doquier las fuerzas de la disgregación siguen activas. Se puede contener los tanques serbios, pero es imposible combatir el "fenómeno Bossi", esto es, el crecimiento de fuerzas sustancialmente rupturistas del orden tradicional de los Estados. Ciertamente, si Ucrania llega a romperse por decisión de la importante minoría rusa que allí vive, será un fenómeno específico, sin parangón posible en ninguna otra zona; si Bélgica se fragmenta por la creciente intransigencia e incompatibilidad de flamencos y valones, también será un acontecimiento de raíces y características particulares. Pero cuando milaneses, catalanes, galeses, escoceses, vascos, bretones y corsos anuncian sus deseos independentistas, queda un poso común que va más allá de la mera táctica política de sus respectivas situaciones. Una vez abierta la cuestión nacional, queda abierta para quien quiera.

En tercer lugar, la evolución en el Norte de África apunta al establecimiento de regímenes islamistas de corte fundamentalista en importantes países de la zona. Por un

lado, la interrupción del proceso democrático hace dos años en Argelia, a fin de impedir el triunfo del Frente Islámico de Salvación (FIS), no ha hecho sino empeorar progresivamente la situación, habiendo llevado al país a una espiral de represión y violencia que está cobrando el aspecto de una nueva guerra civil. Por otro lado, en los vecinos de Argelia las fuerzas islamistas ganan terreno y la represión tiene pocos visos de resolver su emergencia, especialmente en Libia, donde el Coronel Gaddafi encuentra un potencial sucesor en el islamismo más que entre los militares nacionalistas.

Es verdad que el fundamentalismo radical encuentra su raíz en la situación de pobreza económica y en el descontento social de una población que sigue creciendo a un ritmo alto. Pero la esperanza de que con ayuda económica se invertirá la tendencia de crecimiento de estos grupos es ya más bien un espejismo. Se ha acabado el tiempo. Más bien se trata de determinar si será moderado un régimen islamista en Argel.

Ahora bien, sea cual sea la voluntad o las intenciones de un régimen islamista, el mero hecho de una transición desordenada pondría en peligro la estabilidad global de la zona. ¿Qué ocurriría si se detuviese durante diez o doce semanas el suministro de gas a Europa simplemente porque los técnicos encargados de las instalaciones hubiesen huido a Francia? Es más, el fundamentalismo es un movimiento que se autoalimenta, lo que puede llevar a posiciones inesperadas y de consecuencias más negativas de las que se podían esperar al principio. Por poner un ejemplo de lo más benigno, pero no sin consecuencias, el actual gobierno argelino, presa de su retórica nacionalista ha anunciado la extensión de sus aguas territoriales más allá de la tradicional franja de seis millas, comiendo terreno a nuestros pesqueros y poniendo trabas al libre tránsito marítimo.

El problema del fundamentalismo se complica aún más cuando se observa sobre el telón de fondo de la proliferación de armas de destrucción masiva en la zona. China y Corea del Norte son proveedoras de ayuda técnica y militar a Argelia y Libia. Y la posibilidad de que armamento de la antigua URSS llegue a la zona no es baladí. Del ansia de Gaddafi por tener un arma atómica se sabe mucho, de la evolución del programa nuclear argelino se conoce públicamente menos y el hecho de que el caos social derivado del auge del fundamentalismo haya retrasado ese programa ha rebajado notablemente la ansiedad occidental. Aunque los problemas para el futuro siguen presentes.

En cuarto lugar, el futuro de Ceuta y Melilla como plazas de soberanía española vuelve a ponerse en cuestión de manera pública. A principios de Marzo, el rey Hassan II de Marruecos transmitía a su pueblo en un mensaje televisado y radiado su deseo de que las dos ciudades fueran devueltas por los españoles. A penas un mes más tarde, volvía sacar el tema en unos actos conmemorativos en Tetuán. El monarca marroquí reclamaba esta vez un diálogo y una reflexión conjunta con los españoles sobre el futuro de las dos plazas norteafricanas.

Ciertamente, la actitud del Rey es dialogante, y para muchos no pasa de ser una mera táctica para forzar a España a un mayor apoyo a Rabat en su anexión del Sahara y el tema del referéndum en esa zona. Sin embargo no deja de resultar preocupante que el tema de la españolidad de Ceuta y Melilla dependa de los avatares de la dinámica política doméstica de Hassan. Particularmente en un momento en el que su vecina Argelia se dirige al desastre y en el que Marruecos queda como el único bastión de contención del fundamentalismo ante los ojos occidentales.

Es más, si bien la situación actual del monarca le permite garantizar una estabilidad política suficiente, las fuerzas de oposición, religiosas y laicas, pueden plantear problemas en el futuro. De igual forma, si la situación del Sáhara se resuelve positivamente para Rabat, como todo parece indicarlo, ¿qué va a ocurrir con todo un ejército ahora entretenido en el desierto?

Ni el nacionalismo anti-islámico, ni la necesidad de conducir un movimiento religioso hacia cauces moderados, despejan la posibilidad de que Ceuta y Melilla pasen de ser un argumento siempre presente, pero retórico, y se conviertan en un objetivo político.

Y tal vez lo más grave sea que en nuestro país, un escenario donde el futuro de las dos ciudades se juegue en una relación conflictiva, es un tabú político que nadie quiere plantearse seriamente. La confianza hoy se deposita en crear una seria dependencia marroquí de la economía española. Desgraciadamente, la interdependencia, gracias a una hábil diversificación conducida magistralmente por Hassan, ha vuelto cada vez más importante a su país ante el resto de europeos, en lugar de hacerlo más sensible a España.

Un quinto factor que agrava nuestra situación estratégica es la caída, a veces dramática, del esfuerzo en defensa realizado por muchos de nuestros aliados. El Reino Unido se está planteando rebajar su gasto a algo menos del 3 por ciento del PIB para 1998, a la vez que recortar sus niveles de fuerzas en un 30 por ciento; Francia tiende a acercarse al 2'5 por ciento de su PIB en defensa, más que al 3% y sus fuerzas están pasando en estos momentos por una severa reestructuración; en los demás países del continente la tendencia es similar. Y los EE.UU., de proseguir con los planes de Clinton para el Pentágono, serán muy pronto incapaces de montar una operación como la Tormenta del Desierto.

Inmersos en esta dinámica de desarme espontáneo, los planes de la OTAN de crear cuerpos de reacción rápida multinacionales o de constituir agrupaciones tácticas combinadas y conjuntas (Combined Joint Task Forces) se enfrentan a una terrible carencia de recursos y, por ende, a serias deficiencias en sus medios.

Europa se benefició en las décadas pasadas del compromiso y las capacidades militares norteamericanas. En el Golfo, la situación no fue muy distinta. España, a su vez, con una contribución muy marginal a la seguridad colectiva pudo

sacar ventajas del esfuerzo defensivo de los demás. Con la caída de las capacidades ofensivas generales de nuestros aliados, nuestra seguridad y defensa vuelve a estar en nuestras propias manos.

Por último, todos estos rasgos mencionados más arriba coinciden con una creciente marginalidad de España en las instancias internacionales más relevantes. Por un lado, la OTAN lejos de orientar sus esfuerzos hacia un Mediterráneo altamente volátil e inestable, prosigue su curso hacia Centroeuropa y el Este. El centro de gravedad se ha desplazado de Bruselas a Berlín y va más allá todavía.

El mismo fenómeno se experimenta en la Unión Europea, donde los nuevos socios hacen que la institución bascule hacia el norte de Europa y no hacia el sur. De ampliarse aún más la comunidad, con los antiguos satélites de Moscú, el Mediterráneo pasará a ser la periferia de una Europa con problemas muy diversos.

En cualquier caso, se estarán distanciando las visiones y percepciones hasta ahora más o menos comunes sobre el destino de los pueblos de Europa. España pudo jugar su carta de potencia europea hasta hace dos años, cuando la imagen que se tenía de nosotros era la de una nación rica, dinámica y consistente. Pero hoy, la atención que se le presta a un país despilfarrador, débil y paralizado, es cada vez menos.

Sólo nuestra propia fortaleza aseguraría que se nos tomara en importancia y, de esa forma, rompiéramos el cerco de la progresiva soledad con la nos veremos obligados a encarar los retos a nuestra seguridad.

III. FUERZAS ARMADAS Y DEFENSA EN 1994

Si España tuviera que hacer hoy frente a una crisis, la capacidad de reacción de sus Fuerzas Armadas sería mínima. La operatividad de nuestros ejércitos alcanza límites peligrosos. Hay una carencia absoluta de material, de repuestos, de combustibles y hasta de uniformes en todas las unidades militares. Como consecuencia de ello, el adiestramiento de personal y la disponibilidad del material se ha reducido drásticamente. Cada año, un número creciente de armas se van acercando a la obsolescencia sin que haya en marcha programas que las sustituyan. La situación es especialmente dramática en el Ejército de Tierra, pero es también grave en el Ejército del Aire y en la Armada. Por otro lado, la industria de defensa nacional está hundida a causa de la falta de pedidos, de coordinación y de apoyo del Ministerio.

Las causas fundamentales de esta situación son unos presupuestos claramente insuficientes, mal distribuidos y peor gestionados, una burocratización acelerada de nuestra defensa que hace que los escasos recursos disponibles se consuman principalmente en gastos administrativos, un modelo y una dimensión de nuestros Ejércitos desproporcionados a

los medios económicos disponibles, un servicio militar de nueve meses que no sirve absolutamente para nada, una excesiva dispersión del escaso número de tropa profesional, falta de una programación de adquisiciones seria a medio plazo, una desmotivación y absentismo creciente de los mandos y un profundo malestar en importantes colectivos militares.

Frente a esta grave situación, la actuación del Ministerio de Defensa en el último año se ha caracterizado por una palpable falta de voluntad política para solucionar los problemas y una carencia no menos dramática de ideas con las que superar la crisis. La parálisis del Ministerio en estos momentos es absoluta. No tenemos Plan Estratégico Conjunto, ni Objetivo de Fuerza, ni Ley de Dotaciones o Programas, ni Ley de Movilización, ni Libro Blanco de la Defensa. Los planes de reestructuración elaborados por los Cuarteles Generales, especialmente el Plan NORTE, están paralizados a la espera de la aprobación final del Gobierno. La Junta de Defensa Nacional no se reúne desde hace dos años. La Junta de Jefes de Estado Mayor ha sido renovada con un significativo retraso.

Hay además toda una serie de problemas de personal pendientes que el Ministerio es incapaz de negociar con los colectivos correspondientes. Este es el caso de las viviendas militares, la Escala Especial, la Escala Auxiliar, los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, los Oficiales de Complemento y los Oficiales y Suboficiales de la Reserva Transitoria entre otros. Por otro lado, resulta alarmante también el espectacular crecimiento del número de objetores de conciencia e Insumisos entre nuestros jóvenes.

En suma, pese a que han existido también algunos aciertos y éxitos en la política militar, el balance final para la defensa de este último año es claramente negativo.

1. La caída de la operatividad

Evaluar de forma precisa la operatividad de las fuerzas armadas no es fácil. Ni siquiera el propio Ministerio de Defensa ha desarrollado un sistema que permita medir de forma global y sistemática la eficacia de las unidades militares. La situación es además muy diferente en cada uno de los tres ejércitos. El Ejército de Tierra es el que se encuentra en una situación más difícil, con importantísimas carencias de material, un despliegue desmesurado para sus mermados efectivos y recursos y una estructura en periodo de adaptación a las cambiantes condiciones estratégicas. Por el contrario, en la Armada y el Ejército de Aire hay también múltiples problemas y carencias, pero se trata básicamente de deficiencias coyunturales provocadas por los últimos recortes presupuestarios.

Esta realidad diversa exigirá que nuestro análisis haya de ser forzosamente diferenciado para cada uno de los Ejércitos, a pesar de que muchos de los problemas sean comunes a los tres. En cada uno de los Ejércitos analizaremos además los problemas de organización, el nivel de actividad, las carencias de material y la situación del mantenimiento.

a) El Ejército de Tierra

Como hemos señalado anteriormente el Ejército de Tierra es el que se enfrenta con mayores dificultades en estos momentos. Es el ejército que presenta una mayor dispersión de sus unidades, una estructura más desequilibrada, mayores carencias materiales y el que sufre de forma más directa la crisis por la que atraviesa el servicio militar obligatorio.

En los últimos diez años el Ejército ha visto menguar de forma espectacular sus efectivos humanos, hasta quedar reducido a poco más de un tercio de lo que era a principios de la década anterior. Esta reducción no se ha debido exclusivamente a la reducción del tiempo del servicio militar a la mitad, de quince meses a sólo nueve tras la última reforma, sino también a una reducción de sus cuadros de mando de casi el 46 por ciento.

TABLA I

Esta notable reducción de sus efectivos no ha ido acompañada, sin embargo, de la siempre anunciada modernización compensatoria. Los sucesivos planes de reestructuración y modernización que se han puesto en marcha han sido siempre superados por las circunstancias y limitados por la permanente carencia de recursos. Así, un plan tras otro se han sucedido sin llegar ninguno a alcanzar sus objetivos finales. Al plan META (Modernización del Ejército de Tierra) inicial le siguió el plan RETO (Reorganización del Ejército) y a este último le sucederá el ahora en estudio plan NORTE (Nueva Organización del Ejército). Sin embargo, es muy cuestionable que pueda avanzarse en este nuevo plan en un momento en que los presupuestos militares son más restrictivos que nunca. El Ministerio de Defensa carece además de la voluntad política

necesaria para llevar a cabo una reforma de estas características y ambiciones.

Los problemas del Ejército de tierra no son únicamente de dispersión o de sobredimensionamiento de sus estructuras en función de sus recursos humanos y materiales, existen también importantes disfuncionalidades en la cadena de mando orgánico y operativo. Como nuestra intervención en Bosnia-Herzegovina está poniendo de manifiesto, existe una creciente rivalidad entre el Estado Mayor del Cuartel General, el Estado Mayor de las Fuerzas de Acción Rápida y el Estado Mayor del Mando Operativo Terrestre. Las funciones distan mucho de estar delimitadas y la coordinación brilla por su ausencia.

- La actividad en el Ejército de Tierra

La actividad en el ejército de Tierra ha caído de forma espectacular en los últimos años. La partida de combustible ha descendido en términos corrientes desde 1990 en un 22 por ciento y la de transportes, esencial para desplazar a las unidades a los campos de maniobras, lo ha hecho en este mismo período en un 34 por ciento. Esto ha provocado a su vez una drástica reducción en los ejercicios de adiestramiento. Así, los ejercicios ALFA, ejercicios a nivel de compañía, han pasado de 3.123 en 1990 a 1.318 en 1994. Los ejercicios BETA, nivel batallón, han pasado de 185 a 107. Los GAMMA, nivel regimiento, de 24 a 17 y los DELTA, región o zona militar, simplemente han sido suprimidos.

TABLA II

- Deficiencias de material

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) reconocía en su última comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el presupuesto de 1994, en octubre del año pasado, que ni siquiera tenían suficientes uniformes para dotar a los reemplazos en el momento en que se incorporaban a las unidades. Anunciaba a su vez que el 60 por ciento de sus vehículos no pasaría la ITV, inspección requerida para los vehículos con más de cinco años, pero que los debían utilizar porque no tienen otros.

Por otro lado, en un momento en el que prima la movilidad de la fuerza, la necesidad de helicópteros de transporte es acuciante. España dispone de 18 helicópteros de transporte pesado "Chinook", pero habitualmente solo seis están operativos, 6 están en revisión y 6 están siendo "canibalizados" para poder mantener a los otros. La necesidad de helicópteros de transporte medios es aún más acuciante. El propio JEME reconocía que es urgente duplicar al menos el número de estos helicópteros existentes actualmente para dotar de cierta viabilidad a la Fuerza de Acción Rápida. Sin embargo, en el presupuesto de 1994 no hay una sola peseta para ello. Todas estas carencias explican por qué España no ha desplegado un solo helicóptero junto con sus tropas en Bosnia-Herzegovina. Nuestros soldados han tenido que depender para sus evacuaciones y transporte aéreo en la zona de los helicópteros de otros países. Finalmente, nuestros setenta helicópteros de ataque están ya

prácticamente obsoletos.

TABLA III

La situación de nuestros vehículos de combate no es mejor que la descrita para los vehículos de transporte. El grueso de estos vehículos lo sigue constituyendo los TOA's cedidos por Estados Unidos gracias a los antiguos acuerdos de ayuda militar, pero estos vehículos cuentan ya con más de cuarenta años de servicio. Tenemos además grandes carencias en artillería antiaérea, comunicaciones y guerra electrónica. Las reservas de munición garantizan en estos momentos "mucho menos de treinta días" en caso de conflicto, según afirmó el JEME en la comparecencia arriba mencionada.

- Mantenimiento

La situación del mantenimiento es especialmente complicada. Por poner sólo un ejemplo, el Regimiento Soria, de la Segunda División Mecanizada sólo tiene disponibles en este momento el 25 por ciento de sus carros de combate. Este Regimiento no es una excepción, sino que refleja bien lo que es la media de la operatividad de nuestras unidades. Los fondos para el mantenimiento de material se encuentran congelados en términos corrientes desde 1990. Esto significa que se ha producido un descenso significativo en los stocks de repuestos y en la calidad de ese mantenimiento. La falta de reposición del material más envejecido irá agravando además de forma progresiva este problema.

En definitiva, nos encontramos con un Ejército que necesita urgentemente un plan de reestructuración profunda, pero que no cuenta ni con los medios ni con el apoyo político necesario para poder llevar adelante sus planes. Consideramos que sólo ese proceso de reforma y modernización puede sacar adelante un Ejército que hoy se encuentra en quiebra, disminuido, envejecido, inoperativo en su gran mayoría y desmoralizado.

b) La Armada

España cuenta con una Armada claramente inferior a lo que su potencia económica y su posición estratégica harían suponer. Mientras Gran Bretaña tiene disponibilidad de 120 buques de guerra, España solo dispone en estos momentos de 18 buques verdaderamente operativos. Paradójicamente, esa reducida fuerza naval resulta desproporcionadamente poderosa en comparación con nuestra fuerza terrestre y nuestros efectivos aéreos.

Esta limitación de nuestra flota naval tenderá a agravarse en el futuro próximo. La Armada tiene en estos momentos un plan de adquisición de buques muy mermado por los recortes presupuestarios. Así, frente a los 9 barcos mayores y 43 menores que ha dado de baja en los últimos años, sólo dispondrá para sustituirlos de 3 barcos mayores y 4 menores, actualmente en construcción.

Los problemas de la Armada no se reducen, sin embargo, únicamente a la escasez de barcos. Hay también problemas estructurales como la falta de definición de un modelo de mando operativo y mando orgánico claro y eficaz. Tampoco

está poniendo en marcha un plan de reducción y concentración de unidades que la permitiera ahorros adicionales para inversión. Finalmente, las plantillas de personal de la Armada tenderá a mantenerse estables en los próximos años.

TABLA IV

- Actividad en la Armada

La estrategia de la Armada para hacer frente a los recortes presupuestarios se ha basado fundamentalmente en priorizar las inversiones sacrificando la actividad y reduciendo al mínimo el mantenimiento. Así, la partida de combustible se ha reducido en más del 50 por ciento desde 1990. Esto significa, como reconocía el Almirante Vila Miranda, Jefe del Estado Mayor de la Armada, el pasado mes de octubre en el Congreso de los Diputados, que durante este año los días de mar disminuirán desde los 110 estipulados por la OTAN como mínimo a únicamente 70. Sin embargo, esta reducción no es homogénea. Los barcos destinados a misiones internacionales, básicamente nuestras nueve fragatas, superan con creces esa cifra a costa de sacrificar el entrenamiento del resto de la flota. Muchos de nuestros barcos menores o más antiguos permanecen hoy permanentemente amarrados a puerto. El problema de combustible para los barcos con misiones internacionales es mucho menor porque pueden suministrarse en el extranjero a precios mucho más bajos. Además, se está utilizando la reserva de guerra.

- Deficiencias de material

Los problemas de material en la Armada son graves y numerosos. El número de fragatas es claramente insuficiente para hacer frente a nuestros crecientes compromisos internacionales. Así, una avería de una fragata durante su misión de bloqueo económico a Serbia en el Adriático supuso un importante quebranto para poder sustituirla sin desatender otras importantes misiones comprometidas en el seno de la OTAN. Nuestras fragatas tienen además una concepción claramente antisubmarina que se adapta mal a la nueva situación estratégica en la que los submarinos rusos han desaparecido prácticamente de nuestro espacio marítimo estratégico. Por el contrario, nuestras fragatas deberían reforzar su capacidad antiaérea. Como veremos más adelante con mayor detalle, para compensar parcialmente algunas de estas deficiencias nuestro país ha estudiado la posibilidad de alquilar dos fragatas de segunda mano a Estados Unidos. Esta solución, rápida y barata a simple vista, exigiría una completa y costosa adaptación de estos dos buques a los sistemas de armas, comunicaciones y electrónica de nuestras propias fragatas. Supondría además un mal antecedente para nuestra maltrecha industria naval.

TABLA V

Otro grave problema de nuestra Armada es la debilidad de sus medios contraminas. Los actuales cazaminas y dragaminas tienen más de cuarenta años y son sistemas completamente obsoletos. El Plan Altamar preveía en su momento la construcción de 16 nuevos barcos de este tipo, 8 cazaminas y 8 dragaminas. Sin embargo, en estos momentos sólo se piensa en la construcción de cuatro unidades,

cantidad a todas luces insuficiente para asegurar la limpieza de nuestras aguas territoriales de estos artefactos. Así, nuestra flota podría ser neutralizada de forma muy barata sembrando de minas las cercanías de nuestras principales bases navales. En sentido contrario, nuestra Armada no dispone prácticamente de ninguna mina, salvo un número muy reducido lanzadas desde submarinos.

Nuestra flota anfibia, barcos de transporte y desembarco, está completamente obsoleta y anula cualquier capacidad de desembarco de nuestra Infantería de Marina. En este caso, la decisión de alquilar con opción a compra barcos con más de veinte años a Estados Unidos para sustituir a los nuestros, que tienen ya más de cuarenta, está en fase de ejecución. Nuevamente estamos optando por poner un parche que salve la situación a corto plazo, pero que puede resultar más costosa y más ineficaz a largo plazo. Los efectos de esta política de "alquiler" resultarán además nefastos para el futuro de nuestra industria naval militar.

Por su parte, el arma submarina se encuentra cada año con un menor grado de disponibilidad. Las obras de gran carena de nuestros submarinos se retrasan sistemáticamente para poder hacer frente a otros gastos más urgentes. La mitad de nuestra flota submarina se va acercando además al final de su vida operativa sin que exista un programa en marcha para sustituirlos.

Finalmente, el presupuesto de municiones se ha reducido desde 1990 a una cuarta parte, pasando de 4.266 millones de pesetas a 1.185 millones para 1994. En lo que se refiere a la adquisición de misiles la cuantía ha descendido de 2.685 millones en 1990 a 0 pesetas en 1994. Esto está obligando a consumir las reservas de guerra para adiestramiento.

- Mantenimiento

El mantenimiento es el principal problema que actualmente padece la Armada. El presupuesto de mantenimiento de material se ha reducido desde 1990 en un 32 por ciento en términos corrientes. El aprovisionamiento de material se ha reducido a su vez en un 35,5 por ciento en el mismo periodo y en los mismos términos. Esto ha significado la quiebra casi total del sistema de apoyo logístico al material de la Armada. Los stocks de recambios son hoy prácticamente inexistentes y esto está condicionando decisivamente la disponibilidad de nuestra flota. El mantenimiento de algunos barcos, como los LST (buques de desembarco), se ha suprimido totalmente. Todo esto es resultado de la decidida apuesta de la Armada por no detener en la medida de sus posibilidades la construcción de nuevos buques.

Nos encontramos, en definitiva, con una Armada mermada en sus dimensiones, que sólo a fuerza de sacrificar actividad y mantenimiento consigue salvar retazos de su reducido plan de adquisiciones, abocada al alquiler y al mercado de segunda mano para poder satisfacer sus necesidades más perentorias, sobreviviendo gracias a sus reservas de guerra, con buena parte de su flota amarrada a

puerto y sin afrontar una reestructuración y una concentración de instalaciones que cada día parece más urgente.

C) Ejército del Aire

El Ejército del Aire español se encuentra claramente disminuido en relación con las fuerzas aéreas de nuestros socios y aliados. Así, si en el Tratado CFE de desarme convencional en Europa se fijó un techo de aviones de combate para nuestro país de 315 aparatos, en la actualidad únicamente disponemos de 127. Nuestro Ejército del Aire cuenta hoy con un total de diez escuadrones de caza y ataque, siete bases principales y cinco bases secundarias. Su proceso de reestructuración y concentración de unidades se ha iniciado timidamente, aunque aún quedan cuestiones por resolver en ambos sentidos. Esto es aplicable también a la reducción de las plantillas de personal.

TABLA VI

- Actividad del Ejército del Aire

La primera gran carencia a la que se enfrenta el Ejército del Aire es la escasez de combustible. El presupuesto de combustible se ha reducido de los más de 5.000 millones de pesetas gastados en 1991 a sólo 3.000 en 1994. Según el Jefe del Estado Mayor del Aire, este presupuesto cubre únicamente la mitad de las necesidades reales de consumo de nuestra fuerza aérea. Esta carencia de combustible tiene una traducción inmediata en el número de horas de vuelo que realizan nuestros pilotos. En las unidades punteras, como los escuadrones de F-18, el número de horas de vuelo ronda las 180, mientras que el número recomendado por OTAN es de 200 horas.

- Carencia de material

En relación con el material, el principal problema es el insuficiente número de aviones, tanto de combate como de transporte. Nuestra fuerza de caza y ataque se ha reducido desde 1990 en un 30 por ciento, dándose de baja 23 Mirage III, 18 F-5 y 9 Mirage F-1. La insuficiencia de aviones de caza y ataque no podrá ser subsanada hasta la hipotética entrada en servicio del Eurofighter 2000 a principios del próximo siglo. Nuestros aviones de combate están además muy escasamente dotados de armamento de última generación y tienen importantes deficiencias en sus sistemas de guerra electrónica. Para empeorar esta situación, en 1994 gastaremos en la adquisición de misiles aire-aire la tercera parte de lo que invertimos en 1991.

TABLA VII

Aviones de transporte pesado sólo tenemos 8 Hércules, 7 menos de los que tiene Marruecos. Esta gravísima carencia no se subsanará hasta que sea realidad el futuro avión de transporte europeo, probablemente para después del año 2010. La insuficiencia de aviones de transporte medio se están paliando parcialmente con la adquisición de los nuevos CASA 235, pero aún nos encontramos lejos de cubrir nuestras necesidades.

La red de defensa aérea presenta también importantes

deficiencias, si bien está en marcha un programa que tratará de tapar los "agujeros" más importantes. Sin embargo, como ocurre en otros países europeos, mientras continuemos careciendo de sistemas AWACS, aunque sea en régimen compartido con algún otro país aliado, será difícil mantener un control efectivo de nuestro espacio aéreo verdaderamente fiable y un sistema de inteligencia a la altura de los tiempos actuales. En este sentido, es también de destacar la necesidad de modernización que tienen nuestros aviones de patrulla marítima, modernización que ha sido cancelada por falta de recursos.

- La fuga de pilotos

Mención especial merece en el Ejército del Aire la cuestión de los pilotos. El pase a compañías civiles de una parte importante de los pilotos más experimentados provocó en los últimos años un grave lastre para la operatividad del Ejército del Aire. Actualmente, el Ejército del Aire cuenta con un total de 722 pilotos, 680 de los cuales están operativos. Este número no es solo suficiente, sino que puede ser incluso excesivo en función de la reducción del número de aparatos disponibles. Sin embargo, serán necesarios aún dos años más para conseguir el nivel medio de cualificación y adiestramiento que se poseía antes de la fuga masiva de pilotos al sector civil.

- Mantenimiento

El mantenimiento de armamento y material es otra de las graves deficiencias actuales de la fuerza aérea española. El gasto dedicado a este fin se ha reducido en los últimos tres años en un 33 por ciento, pasando de 38.523 millones de pesetas en 1991 a 25.327 en 1994, con un déficit sobre las necesidades reales reconocido de 8.000 millones de pesetas. Estas cifras significan que de las 25 flotas o modelos de avión operativos en el Ejército del Aire este año, están sin financiación para el mantenimiento la mitad de ellas. En caso de que no se habiliten algún tipo de crédito extraordinario, estos aviones deberán forzosamente de dejar de volar al haber agotado su potencial entre revisiones. Esta reducción del presupuesto de mantenimiento podría además tener como resultado una merma de los niveles de seguridad en vuelo de las tripulaciones.

No encontramos mejor resumen de la situación en la que se encuentra hoy el Ejército del Aire español que el símil utilizado por su Jefe de Estado Mayor, General Ramón Sequeiros, cuando afirmaba que "el Ejército del Aire va a seguir volando en régimen de planeo pero, a diferencia del año pasado, me temo que nos acercamos ya peligrosamente al suelo".

2. El presupuesto de defensa.

Una de las causas fundamentales que explican la caída de la operatividad es sin duda la política presupuestaria para la defensa que se ha mantenido en los últimos años, especialmente desde 1989. Esta política se ha caracterizado por una progresiva reducción de los recursos y por un empeoramiento de la estructura interna del gasto. La combinación de estos dos elementos ha conducido a nuestras fuerzas armadas a la difícil situación en que hoy se encuentran.

España ha mantenido tradicionalmente un bajo nivel de gasto en defensa en comparación con otros países de nuestro entorno. Así, en el periodo 1980-1984 la proporción media del PIB dedicado a defensa por los países europeos de la OTAN era del 3,6 por ciento. Por el contrario la media española en ese mismo periodo se situaba en el 2,3 por ciento. Sin embargo, en los últimos diez años España se ha alejado aún más de Europa respecto a su esfuerzo en defensa. En 1992 la media europea había descendido al 2,7 por 100, mientras que España se situaba en el 1,3 (1,6 según la estadística OTAN). Esto supone que España realiza hoy la mitad de esfuerzo en defensa del que realizan el resto de sus socios y aliados europeos.

TABLA VIII

En los cuatro últimos años esta situación de insuficiencia de los recursos dedicados a la defensa se ha agravado aún más al reducirse nuestro gasto militar en más del 25 por ciento en términos reales. Esta drástica reducción ha tenido dos consecuencias básicas: por un lado, una caída espectacular de la actividad y el adiestramiento en las fuerzas armadas, comprometiendo la operatividad de las mismas a corto plazo. Por otro, una reducción de la inversión cercana al 50 por 100, comprometiendo la operatividad a largo plazo.

Los constantes recortes presupuestarios realizados desde 1989, y el empeoramiento consiguiente de la estructura y eficacia de nuestro gasto militar, hace que nos encontremos en estos momentos con unos ejércitos mayoritariamente ficticios. Las unidades existen sobre el papel, pero en realidad se encuentran completamente inoperativas debido a la carencia de recursos. Así, en caso de una agresión contra nuestro territorio o nuestros intereses vitales, nuestra capacidad de reacción sería hoy casi nula.

Esta lamentable situación en absoluto puede justificarse por la difícil coyuntura que vive actualmente nuestra economía. El esfuerzo en defensa de nuestro país, medido en términos de gasto militar/Producto Interior Bruto, se ha reducido a la mitad en la última década, desde el 2,20 por ciento de 1984 hasta el 1,26 de 1994.

TABLA IX

En relación con los Presupuestos Generales del Estado, la prioridad otorgada a la defensa se ha reducido aún en

mayor medida en este mismo periodo, pasando del 10,2 por ciento a un 4,3 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para 1994.

TABLA X

Tampoco es posible justificar estos descensos por la tendencia generalizada que hoy existe en Europa a reducir los gastos militares como consecuencia del final de la guerra fría. En primer lugar, porque como hemos dicho el esfuerzo medio europeo en defensa es el doble del realizado por España. Nuestro país ocupa en el conjunto de los países europeos el penúltimo lugar en cuanto a su esfuerzo en defensa y es además el segundo país, solo superado por Bélgica, que mayor reducción ha realizado en los tres últimos años.

Resultando preocupante el creciente desequilibrio entre nuestra potencia económica, demográfica, y política y nuestras capacidades militares, más pernicioso resulta aún el desequilibrio entre el modelo y la dimensión de fuerzas armadas que queremos desarrollar y los recursos que realmente asignamos a la tarea. El Congreso de los Diputados aprobó en 1991 una Ponencia sobre el modelo de fuerzas armadas en su conexión con el servicio militar en el que se preveía que para unos ejércitos de 180.000 hombres, profesionalizados al 50 por 100, sería preciso un gasto en defensa en torno al 2 por ciento de nuestro PIB. Tratar de llevar a cabo ese mismo modelo con solo la mitad de recursos supone construir unas fuerzas armadas huecas, carentes de toda capacidad operativa y que consumen la mayor parte de los recursos que se le asignan es su mera subsistencia: sueldos, alimentación, uniformes y poco más.

Este desequilibrio se pone además en evidencia si se compara la dimensión y el presupuesto de otros ejércitos Europeos. Así, Alemania gasta 6,7 veces más en defensa para dotar unas fuerzas armadas sólo dos veces mayores que las nuestras. Francia gasta 7,4 veces nuestro presupuesto de defensa, mientras que sus efectivos sólo son 2,5 veces los nuestros. Finalmente, Italia multiplica por 3,25 el gasto militar español para unas fuerzas armadas 2,25 veces mayores.

Sin embargo, la crítica situación que hoy atraviesan las fuerzas armadas, y que hemos descrito con mayor presión en el punto anterior, no es achacable únicamente a una insuficiencia de los recursos financieros, sino que se debe muy principalmente a la falta de previsión y programación de los mismos, a la creciente burocratización del gasto en defensa y a la mala gestión que se ha hecho de estos fondos. Así, mientras los gastos de operativos y de adquisición de material se han reducido notablemente en la última década, los gastos de administración se han multiplicado por tres en los últimos diez años, pasando de 59.000 a 151.000 millones; y mientras los presupuestos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire han sufrido profundos recortes en términos reales, el presupuesto del Organo

Central de la defensa se ha multiplicado por cuatro en ese mismo periodo, pasando del 12,5 por 100 al 27,2 del total del presupuesto.

La ausencia de programación y la mala gestión ha provocado además que la mayor parte de la reducción del presupuesto iniciada en 1989 se haya realizado a costa de mermar la capacidad inversora del departamento. En los cuatro últimos años la capacidad de adquisición de material se ha reducido a casi la mitad. Esto supone quebrar en pleno desarrollo un proceso de modernización de nuestras fuerzas armadas que se había iniciado con mucho esfuerzo y sacrificio en la década de los ochenta. Supone además un paulatino envejecimiento y obsolescencia del material de nuestros ejércitos que están perdiendo "competitividad" en términos relativos de forma acelerada.

El presupuesto de defensa para 1994 puede tener dos lecturas diferentes. Por un lado, es la primera vez en los cuatro últimos en que el gasto militar no sólo no disminuye sino que sufre un ligero aumento, el 6,3 por 100 en términos corrientes. En sentido inverso, se puede interpretar que el presupuesto para 1994 consolida los recortes efectuados en el gasto militar desde 1989, anclando nuestro esfuerzo en defensa en torno al 1,2 por 100 del PIB, el esfuerzo más bajo con diferencia de la OTAN exceptuando al pequeño Luxemburgo.

TABLA XI

En nuestra opinión, el presupuesto de defensa para el presente ejercicio no representa tanto un cambio de tendencia, ni un punto de inflexión, como la consolidación de los recortes que el Departamento viene sufriendo en los cinco últimos años. En relación con el resto del gasto público se mantiene la tendencia a la baja, pasando la Sección Defensa del 4,5 al 4,3% del presupuesto total del Estado. Respecto al PIB, nuestro gasto en defensa se mantiene en el mínimo del 1,2% alcanzado el año pasado, con un ascenso casi imperceptible de seis centésimas. Finalmente, si comparamos el proyecto presupuestario con los créditos definitivos de 1993, se produce incluso una importante disminución de 105.631 millones.

Por otro lado, el presupuesto de este año profundiza en el desequilibrio entre el modelo de Fuerzas Armadas y los recursos que realmente se asignan a la defensa. Nuestra defensa sufre actualmente un déficit de casi 500.000 millones de pesetas. Esto no significa que política o económicamente sea posible hoy un incremento de nuestro gasto militar de esas dimensiones, ni que en términos estratégicos esto sea estrictamente necesario. Es más, en nuestra opinión será difícil un incremento significativo del gasto en defensa mientras persista la actual situación de crisis económica. Sin embargo, un presupuesto razonable y equilibrado, dada la dimensión y las necesidades actuales de nuestras fuerzas armadas, debería ascender al menos al billón de pesetas anual en nuestro país.

El principal problema, pese a todo, no reside en que se gaste cada vez menos en defensa, sino en que se gasta cada

vez peor. Al margen de la creciente burocratización de nuestro gasto en defensa, existe una falta de transparencia y de objetividad en la asignación de contratos de material para la defensa, así como una errática política de adquisiciones que nos ha hecho abandonar programas de I+D en los que nos habíamos gastado más de 6.000 millones de pesetas o abandonar un programa, como la modernización del Mirage III, cuando se había invertido en ello más de 5.000 millones. Esto supone un injustificable derroche de recursos cada vez más escasos.

En definitiva, la política presupuestaria seguida por nuestro país en los últimos años ha llevado a las Fuerzas Armadas a una profunda crisis, paralizando su actividad hasta límites peligrosos, quebrando el proceso de modernización de las mismas y situando su operatividad bajo mínimos históricos. Cualquier reforma que quiera realizarse en el campo de la defensa estará condenada al fracaso sino va acompañado de un cambio simultáneo en la política presupuestaria para defensa.

TABLA XII

3. La política de adquisiciones

Hemos señalado ya en varias ocasiones que el problema de nuestra defensa no es sólo la carencia de medios sino el mal uso de los escasos recursos disponibles. Este hecho se pone de manifiesto muy claramente en la errática política de adquisición de material que se ha practicado en los últimos años. Como ejemplos de esta política errónea pondremos la adquisición del futuro avión de combate europeo, la adquisición de los carros de combate M-60 y el alquiler de buques de segunda mano a los Estados Unidos para nuestra Armada.

a) La hipoteca del EFA

España debe replantearse su participación en la fase de producción del Eurofighter 2000. La profunda crisis económica que padece nuestro país no nos permite gastarnos en estos momentos casi un billón de pesetas en un nuevo avión de combate. Este programa supone además una hipoteca insalvable no sólo para el Ejército del Aire sino para el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas que padecen en estos momentos dramáticas carencias. Por otro lado, en la nueva situación estratégica es difícil justificar la necesidad para nuestro país de un avión de la sofisticación del EF-2000, mientras que la acumulación de retrasos en el desarrollo del programa someterá a nuestra aviación de combate a una dramática carencia de aparatos en los próximos veinte años. Finalmente, el limitado nivel tecnológico e industrial de nuestro sector aeronáutico hace difícil que podamos obtener todos los beneficios potenciales de nuestra participación en el proyecto.

España necesita urgentemente reforzar su capacidad de defensa aérea. El modo más racional de hacerlo, en el contexto de la crisis económica que padecemos actualmente, es adquirir algún avión de la generación hoy en servicio en todos los países europeos, disponibles a precios muy bajos y que satisfacen de forma suficiente nuestras necesidades estratégicas. Paralelamente, nuestro país podría desarrollar un proyecto propio de un avión de apoyo táctico y entrenamiento avanzado, como el abandonado proyecto AX, que permitiría a nuestra industria aeronáutica aprovechar las capacidades tecnológicas obtenidas con el desarrollo EFA, cubriría las necesidades de nuestra fuerza aérea en esos dos campos y generaría más puestos de trabajo y más desarrollo industrial que nuestra permanencia en el EF-2000.

España ha perdido desde 1990 el 30% de su aviación de combate. Hoy sólo cuenta con un total de 120 aparatos, número muy inferior al que corresponde a un país como España. Es más, actualmente sólo tenemos realmente operativos los setenta F-18, aunque en realidad todavía carecen de guerra electrónica y de determinados sistemas de armas. El F-5 es un avión prácticamente obsoleto del que se están modernizando unas pocas unidades para adiestramiento. El Mirage F-1 está también pendiente de un programa de modernización que le permita alargar su ya dilatada vida operativa, dado que actualmente no puede volar más de dos

horas seguidas ni pasar de 500 millas de velocidad. Como reconocía en su última comparecencia el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), este número de aviones es claramente insuficiente, desproporcionado a nuestra potencia como nación y nos sitúa en clara inferioridad no sólo en relación con nuestros aliados europeos sino también con nuestros vecinos del sur. La Fuerza Aérea francesa dispone nada menos que de 598 aparatos, Gran Bretaña de 570, Italia de 390, Holanda de 189 y Portugal de 99. Lo que es más grave aún, Libia dispone de 515 aviones de combate, Argelia de 299 y Marruecos de 109. Mantener esta situación en los próximos veinte años puede resultar una grave irresponsabilidad.

Los constantes problemas técnicos e incertidumbres políticas que ha soportado el EFA desde su nacimiento han provocado que el primer vuelo del prototipo se haya retrasado ya más de dos años. Es más, el programa se desarrolla hoy a un ritmo muy aminorado. Esto significa que, siendo optimistas, al menos hasta el año 2.002 no se entregarán las dos primeras unidades del Eurofighter 2000 a nuestro Ejército del Aire y hasta el 2013 no se entregarán el total de los 87 aparatos inicialmente previstos (en realidad el último número que se baraja es de 82, pero la cifra varía constantemente y casi siempre a la baja). No obstante, si tenemos en consideración que las previsiones iniciales era tenerlo operativo a mediados de la década actual, nada nos garantiza que puedan producirse nuevos retrasos. Teniendo en consideración la urgencia que nuestro país tiene de potenciar su fuerza aérea, todos estos retrasos suponen alargar peligrosamente nuestra vulnerabilidad aérea actual. Italia, que también participa en el proyecto, ha tenido ya que alquilar 23 Tornados F-III al Reino Unido para paliar sus carencias.

Al problema de los retrasos habría que añadir la incertidumbre aún latente sobre la viabilidad final del proyecto. Aún quedan al menos dos años hasta que pueda iniciarse la fase de producción y multitud de documentos intermedios deben negociarse y firmarse. Alemania anunció repentinamente hace dos años que se retiraba del programa porque en la situación de crisis actual no podía asumir el coste financiero que suponía el programa, ni el avión le era ya tan necesario tras el final de la guerra fría. Posteriores negociaciones le hicieron permanecer en la fase de desarrollo, pero dejar en el aire su participación en la fase de producción. En cualquier caso, este país ha reducido su participación en el proyecto del 33% inicial a un 23% y el número de aviones de 250 a 140. Las negociaciones sobre cómo afectarán esos recortes a la industria alemana están por iniciarse y se anuncian extraordinariamente difíciles. Así, la posibilidad de que Alemania decida finalmente no permanecer en la fase de producción debe ser considerada seriamente. La inestabilidad política que sufre Italia introduce también algunas dudas sobre su permanencia. El Reino Unido es el único país que ha mostrado su voluntad de seguir con el proyecto sea este a cuatro, a tres, a dos o a uno. Sin embargo, nos consta que al mismo tiempo continúan

evaluando otras alternativas.

El principal problema del EF-2000 lo constituye su desmesurado coste. El coste total del programa estimado para nuestro país asciende a 850.000 millones de pesetas, de los que 250.000 corresponden a la fase de desarrollo y algo más de 600.000 a la fase de producción. Sin embargo, este coste es una mera estimación que puede sufrir notables variaciones al alza. Construcciones Aeronáuticas (CASA) afirma tener un estudio que demuestra un ahorro económico del 30% con la fórmula de codesarrollo y coproducción utilizada en el caza europeo respecto a la de mera adquisición con compensaciones, pero los 9.800 millones de pesetas que suponen el coste total estimado por avión, incluyendo investigación y desarrollo, es superior al que el mercado internacional ofrece en aviones de esas características. Por otro lado, es sabido que la cooperación internacional en materia de armamento tiene un coste de gestión y coordinación añadido muy importante.

El coste de producción por aparato, estimado actualmente en 6.957 millones de pesetas supone un ahorro teórico del 30% con respecto al proyecto inicial, aunque está por ver que ese ahorro sea real. Sin embargo, esa reducción se hará básicamente reduciendo equipos electrónicos, aviónica y sistemas de armas en el avión base que serán añadidos después por los países en función de sus necesidades y posibilidades. Esto supone en la práctica la construcción de un "avión a la carta" en la que España se acogerá con toda probabilidad al "menú más económico". La cuestión es si compensa adquirir una magnífica plataforma de combate para posteriormente no poder dotarla de los equipos y armas necesarias. El antecedente del F-18 demuestra que es irracional adquirir un avión que se encuentra muy por encima de las cada vez más escasas posibilidades presupuestarias de nuestro Ejército del Aire.

El acuerdo entre los cuatro países participantes en el programa hace que salirse de la fase de desarrollo en estos momentos pudiera salir más caro que culminarla. Nuestra única opción estriba por tanto en participar o no en la fase de producción del avión. España ha pagado ya 115.000 millones en la fase de desarrollo y tiene comprometidos otros 135.000 en esa fase. Participar en fase de producción supondría desembolsar por nuestra parte más de 600.000 millones de pesetas adicionales. Teniendo en consideración que el coste de adquirir 70 F-16 en Estados Unidos sería de unos 70.000 millones de pesetas, el ahorro real que supondría abandonar el EF-2000 sería de más de medio billón de pesetas.

La industria aeronáutica nacional, perteneciente al Estado en más del 90% de su capital, argumenta que es preciso tener en consideración el beneficio tecnológico y los puestos de trabajo creados por nuestra participación en el programa. No obstante, el posible beneficio tecnológico lo habremos obtenido en su totalidad al culminar la fase de desarrollo, pese a que nuestro bajo nivel actual no nos está permitiendo obtener todos los beneficios que nos brinda la

cooperación en este campo. Por otro lado, será difícil que en la fase de producción nuestra industria nacional pueda hacer frente al porcentaje que teóricamente le corresponde. Ya en la fase de desarrollo hemos tenido que recurrir a empresas extranjeras ante la incapacidad de las españolas de hacer frente a compromisos adquiridos. En cuanto a los puestos de trabajo, el proyecto generaría unos 8.000 empleos. Este nivel de empleo, muy inferior a los 40.000 que se estiman para el Reino Unido, podría ser fácilmente asimilado en su mayor parte por la suma de un proyecto como el del AX y la modernización y mantenimiento de otro avión adquirido a bajo coste y de forma inmediata. Finalmente, el beneficio empresarial estimado, unos 60.000 millones de pesetas, es inferior al que ha generado un programa nacional como el CN-235, por lo que tampoco resulta un factor decisivo.

La idea inicial era que el porcentaje de participación del 13% que tiene nuestro país se distribuyese por igual entre todos los componentes esenciales del avión. Sin embargo, mientras que en la estructura del avión nuestra participación esta siendo satisfactoria, no está ocurriendo lo mismo en las otras áreas. Hemos de reconocer que CASA está teniendo un brillante papel en el desarrollo del proyecto. Tiene asignadas ya la construcción del 50% de las alas del avión y una parte importante del fuselaje. Esta empresa ha adquirido además una tecnología en el modelado de materiales absolutamente innovadora. Por el contrario, en lo que se refiere a electrónica y aviónica no hemos avanzado nada. Es más, las aspiraciones de lo que era INISEL se reducían únicamente a fabricar las fuentes de alimentación, las pilas, del avión. La otra empresa ahora fusionada en el grupo INDRA, CESELSA, aspiraba a alcanzar contratos en el radar y en el sistema de defensa aérea, pero por ahora todo esto se reduce a expectativas sin ningún contrato firme. Hay datos muy preocupantes en este tema. Una empresa electrónica denominada ELT, participada en un 49% por los italianos de Electrónica de Roma (ELTSPA), está pugnando por conseguir esos mismos contratos. Concedérselos sería tanto como ceder nuestra participación en el área electrónica del proyecto a Italia. Por otra parte, TELETRA podría desarrollar lo que se denomina "sistema supervisor" del avión, porque fabrica ya un sistema de tecnología parecida. No obstante, la sensación en el sector es que España va a quedar al margen de toda la electrónica del avión. Otro ejemplo de cesión de nuestra participación es el desarrollo del sistema de oxígeno del avión. Este sistema que había sido asignado a nuestro país ha tenido que ser subcontratado a una empresa alemana por carecer de capacidad tecnológica para su desarrollo. Lo cierto es que si el Gobierno no endereza la negociación nuestra falta de capacidad tecnológica nos va a dejar fuera de los elementos esenciales y el beneficio potencial de nuestra participación se reducirá notablemente.

Por otro lado, una hipotética compra de aviones en el mercado internacional llevaría también consigo un programa paralelo de compensaciones económicas y transferencia de

tecnología. Es más, adquirir un número importante de F-16 modernizados, brindaría a CASA la oportunidad de poner en marcha un programa de mantenimiento de este avión aplicable a otras flotas basadas en Europa. Además, abandonar el EF-2000 liberaría fondos más que suficientes para desarrollar el viejo proyecto de un avión nacional de apoyo táctico y entrenamiento avanzado, Proyecto AX, en el que podría aplicarse buena parte de las tecnologías adquiridas en el desarrollo del EF-2000. Estos dos programas generarían, como ya hemos señalado, al menos tantos puestos de trabajo y más riqueza que el caza europeo por sí solo.

Sin embargo, el importantísimo esfuerzo económico y el peligroso alargamiento de los plazos que supone permanecer en el EF-2000 no nos permitirá, sin embargo, acceder a un avión realmente competitivo entre los cazas de nueva generación. Los recortes en sus prestaciones operativas, efectuadas como consecuencia de la presión alemana y española para reducir su coste, darán como resultado un avión a mitad de camino entre la actual generación de cazas y la siguiente. Así, los EF-2000 que adquiera España tendrán reducidas sus requerimientos de comunicación, habrá disminuido su capacidad de ataque al suelo, tendrá menor autonomía de la inicialmente prevista, tendrá menor potencia, menor velocidad y en consecuencia menor habilidad de combate aire-aire y necesitará mayor longitud de pistas para el despegue y el aterrizaje. El nuevo EFA será inferior, por tanto, al F-22 que actualmente desarrolla la industria norteamericana e incluso a las últimas generaciones de F-18.

A pesar de todas estas limitaciones con respecto al proyecto original y a la desproporción entre el coste y las capacidades del avión, lo cierto es que el EF-2000 seguirá siendo un avión excesivamente sofisticado para las necesidades reales de nuestro país. Los escenarios de conflicto a los que España tiene que hacer frente en el futuro previsible no exigen el nivel tecnológico que demandan otros escenarios estratégicos. Es claro que la capacidad tecnológica rusa, aunque mermada, no es comparable a la argelina. España tiene en estos momentos una grave deficiencia numérica de aviones de combate y transporte, pero la solución a este problema no es adquirir un número reducido de aviones altamente sofisticados, a los que difícilmente podrá armar convenientemente y que hipotecarán la capacidad adquisitiva de nuestras Fuerzas Armadas por un buen número de años. Máxime cuando en la situación económica actual no son previsibles grandes incrementos del gasto en defensa en España que el Gobierno socialista ha situado en niveles ínfimos. Mientras que el gasto militar en el Reino Unido asciende a 9.011 dólares per capita para defensa y 3,8% de su PIB, en Alemania a 10.251 dólares y 2,0% del PIB respectivamente y en Italia a 8.815 dólares y 2,0% del PIB, España sólo alcanza los 5.371 dólares per cápita y el 1,2% de su PIB.

Tampoco puede sostenerse nuestra continuidad en el programa por un criterio meramente político. La

desvinculación de Francia del proyecto limita enormemente el carácter "europeo" del caza. Todos los socios han mirado prioritariamente a su interés nacional a la hora de definir especificaciones, costes y repartos de desarrollo y producción. El otro gran adalid de la unión europea, Alemania, no dudó en cuestionar el programa cuando consideró que el avión no se ajustaba ya a sus necesidades. Nuestro escaso porcentaje de participación nos da además mucha mayor libertad de acción, porque la participación de nuestro país no es determinante para la viabilidad del proyecto. En cualquier caso, el argumento europeísta no puede mantenernos por sí solo en un programa que no podemos afrontar económicamente, que no nos soluciona a corto y medio plazo el gravísimo problema militar de insuficiencia de nuestra aviación de combate y que en términos estratégicos difícilmente necesitaremos en el largo plazo.

El avión europeo de combate fue un producto resultante de la combinación de guerra fría, bonanza económica y euforia europeísta que vivió nuestro continente durante buena parte de la década de los ochenta. Sin embargo, España no puede, en la situación de crisis actual, aferrarse a proyectos faraónicos que no podemos asumir ni financiera ni tecnológicamente. No hay nada más peligroso en política que continuar por una senda equivocada por el mero hecho de que ya ha sido iniciada. Siempre será menos costoso desandar el camino que profundizar en un error hasta culminarlo.

b) Barcos de alquiler

En el número del mes de abril de la Revista Española de Defensa se recoge la noticia de que la flota de combate española dispondrá en breve de dos nuevos buques anfibios. En el tono laudatorio que la caracteriza, ensalza estas incorporaciones ya que "los dos nuevos buques modernizarán y potenciarán el Grupo Delta de la Armada".

Ciertamente, con una flota anfibia exigua y cuya vida operativa media ronda los 40 años, es de agradecer el rejuvenecimiento de estos elementos. Sin embargo, la "adquisición" de estas dos naves no refleja más que la falta de planificación de las adquisiciones a medio plazo así como la incapacidad del Ministerio para sostener el plan de construcciones nacionales.

Para comenzar, tal y como muy bien señaló el Secretario de Estado de la Defensa, el sr. Flos Bassols, en una de sus comparencias ante la comisión de defensa del Congreso, no se trata de una verdadera adquisición, sino de un mecanismo más sutil: el alquiler de las naves con una opción de compra final. Esto es, un simple *leasing*.

Las dos naves, actualmente en servicio en la US Navy bajo los nombres de *Harlan County* y *Barnstable County*, serán entregadas a nuestra marina en julio de este año y en la primavera del 95, para que operen en nuestra flota por un período de 50 meses, tras los cuales, el Gobierno español decidirá qué opción tomar sobre ellas, si devolverlas o, por el contrario, comprarlas.

Si el alquiler fuese una opción transitoria mientras España fabrica, coproduce o participa en un programa multinacional para un buque anfibio, podría ser una opción adecuada. Pero si no se toman ya las medidas para empezar la programación de nuevos y modernos sistemas anfibios, la alternativa transitoria, en la que se tendrá que invertir en su adaptación para volverlas plenamente compatibles con nuestros sistemas vigentes, se convertirá en una opción permanente y España acabará comprando estos dos buques que hoy se alquilan.

Esta solución podría no parecer tan dramática. Pero cabe recordar que estas dos naves, hoy plenamente operativas, salen al mercado como integrantes del plan de recortes y pases a situación de reservas de la US Navy. De hecho, la *Harlan* fue botada en 1971 y entró en servicio en 1972, la misma fecha que para su nave acompañante. Es decir, que las futuras *Hernán Cortes* y *Pizarro* -tal será su denominación

española- cuentan ya con más de 20 años de servicio a sus espaldas. No son buques nuevos.

Es probable que la exigüidad del actual presupuesto de defensa imposibilite que nuestra Armada pueda contar con buques anfibios de nueva generación. O que el *leasing* se hiciera sobre algo menos usado. Pero los 25 millones de ptas. que se van a destinar cada mes para pagar el alquiler de cada nave no parece que den para mucho más.

Al contrario, todo apunta a que incluso esta cifra resulta costosa para la partida de inversiones de la Armada, quien para poder pagar estos dos buques deberá postponer el mantenimiento de algunas de sus unidades. Se habla de aplazar la gran carena del *Narval*, uno de nuestros 8 submarinos, unidades de las que no estamos sobrados, ni mucho menos.

c) El recambio de los carros

Tal vez el ejemplo más evidente de la falta de planificación de las adquisiciones y del "parcheo" permanente que se intenta realizar desde el Ministerio en lo tocante a la modernización del material, sea el caso de los carros de combate.

Con un parque de carros constituido en su mitad por tanques de la generación de la guerra de Corea (los americanos M-47 y M-48) y el resto por los franceses AMX-30, en servicio desde comienzos de los años 70, el arma acorazada española necesitaba en los primeros 90 una profunda modernización.

Tres alternativas se encontraban sobre el tapete: la primera, la producción nacional de un nuevo carro, el "Lince"; la segunda, la adquisición de un carro moderno en el extranjero; la tercera, la modernización de algunos de los carros en servicio. Operacionalmente, la segunda opción era la más deseable; industrialmente, la primera parecía mejor colocada, no obstante. sin embargo, debido a la falta de recursos financieros, tanto una como otra eran del todo imposible, así que se terminó optando por la tercera: la modernización de 160 carros AMX-30 a los que se dotó con un nuevo sistema de tiro y con un motor más potente, a un coste de 27.000 millones de ptas.

Por sorpresa, y antes de que esta modernización se hubiera completado, la firma del acuerdo CFE abrió la posibilidad de realizar una "cascada de sistemas de armas", esto es, transferir desde el Frente Central sistemas allí en servicio a cambio de destruir los excedentes de nuestro armamento

viejo. De esa forma, el Estado Mayor del Ejército español abrió los brazos en 1992 a 532 carros de combate americanos M-60.

La imposibilidad financiera de hacer frente a la necesaria modernización y adaptación de todos esos carros -que llegaban prácticamente desnudos- hizo que el Ministerio recortara las aspiraciones numéricas del Estado Mayor y dejara la cifra de los M-60 en cien unidades menos.

La adquisición de los M-60 no suscitó grandes polémicas a pesar de que se trataba de un carro de penúltima y no última generación, con problemas logísticos (por ejemplo, el no contar con barcazas para su traslado por carreteras), y que tal vez fuese demasiado pesado para la orografía ibérica. Pero, en cualquier caso, resultaba muy superior a todo cuanto teníamos.

Hasta aquí nada tremendamente anormal. Pero en 1994 surge la segunda gran sorpresa: justo cuando se comienza la entrega de las barcazas de transporte de los M-60, se disparan las críticas a este carro: que si es demasiado viejo; que si sale demasiado caro modernizarlos; que si lo tienen hasta los marroquíes...

Es más, parece ser que tras la cumbre hispano-germana de diciembre de 1993 tanto el ministro de defensa como el Estado Mayor Conjunto tienen interés en explorar las condiciones de adquisición de un carro alemán, probablemente el Leopard 1A5. El Ministro porque así España tendría sistemas acorazados europeos con los que contribuir al eurocuerpo; el EMACON para conseguir un carro mejor dotado.

Es verdad que el Leopard 1A5 es un buen carro y que Alemania tiene en mente deshacerse de muchos de los 400 actualmente en servicio. Pero volvemos a la pregunta de antes: ¿no estaremos comprando demasiado barato? ¿No sería preferible intentar adquirir menos pero mejores carros, tipo Leopard II? El Leopard II es el carro que emplean ya diversos países, lo que simplificaría de hecho la estandarización del parque de carros y todos los problemas relacionados con su industria a nivel europeo. Desde el punto de vista operativo, el Leoprad II va armado con un cañón de última generación de 120/44, el mismo que monta el novísimo carro americano M1 Abrams.

La cuestión estribaría en decidirse por carros usados o nuevos y con qué compensaciones. Pero para nosotros, la compra de sistemas viejos o de pocas prestaciones, en estos momentos, supondría derrochar los escasos recursos con que cuenta nuestra defensa. Y, desde luego, sería preferible reducir el parque de carros pero que éstos fuesen plenamente

equiparables a los de nuestros principales aliados y muy por encima de nuestros posibles adversarios.

4. El factor humano

a) La desmoralización de los profesionales

La política de personal practicada por el Ministerio de Defensa ha cometido algunos errores que han incidido muy negativamente en la operatividad de las unidades. La reordenación de cuerpos y escalas, derivada del desarrollo de la Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar, ha ido generando en los últimos años una serie de colectivos que se sienten fuertemente agraviados. Entre ellos se puede destacar a los componentes de la Escala Especial del Ejército de Tierra, hoy integrados en la Escala Media. Estos oficiales, profundamente decepcionados por lo que consideran un retroceso en sus expectativas profesionales, han creado algunos problemas de funcionamiento en sus unidades.

Otro colectivo importante de descontentos han sido los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos del Ejército del Aire que se han sentido también discriminados en la integración de escalas y han creado dificultades por exceso de celo en el mantenimiento de los aviones de nuestra fuerza aérea. El caso de la fuga de pilotos militares a compañías civiles ha sido el caso más llamativo que ha puesto de manifiesto el descontento, la desmoralización y la crisis vocacional que muchos militares sienten en estos momentos como consecuencia de la situación de las fuerzas armadas.

Por otro lado, el Decreto sobre viviendas militares, que amenazaba con echar de sus casas a importantes colectivos de funcionarios del Ministerio de Defensa, ha creado un enorme malestar general entre los componentes de las fuerzas armadas. A ello habría que añadir la implantación de los sistemas de clasificación para el ascenso que ha generado también múltiples casos de descontento entre los que se consideraban injustamente calificados.

Todo estos conflictos han contribuido, junto con la frustración profesional que provoca la carencia de medios y el escaso reconocimiento social que reciben, a incrementar la desmoralización y desmotivación de los profesionales de la milicia. Empiezan a darse algunos casos de absentismo en unidades especialmente maltratados por la escasez de recursos. Un "pasotismo" cada vez más generalizado se extiende ante una situación profesional y personal que se deteriora progresivamente.

TABLA XIII

b) La crisis del servicio militar

La crisis en que se encuentra el servicio militar obligatorio es otro factor esencial para entender el deterioro de la operatividad de las fuerzas armadas. Es más, el propio modelo de ejército mixto se encuentra hoy comprometido por la profunda crisis que atraviesa el servicio militar. Así, el número de objetores que se declaren en 1994 puede superar el 50 por 100 de los jóvenes llamados a filas en este mismo año. Esto supondría que el número acumulado de objetores al acabar el año sería superior a los 250.000. La tendencia es además de crecimiento constante y exponencial.

Por otro lado, de los 180.000 objetores actualmente reconocidos más de 4.500 se niegan a cumplir también con la Prestación Social Sustitutoria (PSS) y el número de estos últimos crece también de forma rápida. Estas cifras están cuestionando muy seriamente la viabilidad de nuestro modelo de servicio militar a medio plazo.

El reemplazo para 1994 fue fijado por el Consejo de Ministros en 210.822 llamados a filas. Por su parte, el volumen de alistados, jóvenes que cumplen la edad reglamentaria para el servicio militar, ascendía ese mismo año a 369.394. De este total de jóvenes 8.340 se han declarado ya objetores de conciencia, 28.660 han resultado exentos por enfermedad o limitación física y 182.187 han solicitado prórroga, mayoritariamente de estudios, y 18.757 están pendientes de clasificación. Realizadas todas estas deducciones la cifra de alistados aptos para el servicio militar es de 130.784, por lo que son necesarios 78.693 provenientes de alistamientos anteriores.

Estas cifras demuestran que la mayoría de los jóvenes que se declaran objetores de conciencia provienen de aquellos que gozan de prórrogas de distintas clases, que ascienden a un total de 1.084.054. Gracias a esa bolsa acumulada es posible cada año completar los contingentes fijados. Sin embargo, si tenemos en consideración el fuerte descenso demográfico experimentado por la sociedad española en la década de los 80 y el constante incremento del número de objetores, llegaremos a la conclusión de que en un futuro no muy lejano podemos tener enormes dificultades para cubrir el contingente necesario de tropa de reemplazo.

La crisis del servicio militar obligatorio en nuestro país está motivada en realidad por un doble problema: por un lado, su progresiva inutilidad para la defensa nacional y, por otro, el creciente rechazo social que genera. Estos dos

problemas se encuentran además profundamente interrelacionados.

El fuerte rechazo social que hoy genera el reclutamiento forzoso es un fenómeno complejo y difícil de explicar. Por un lado, hay un creciente divorcio en las sociedades modernas entre los valores militares clásicos (patriotismo, disciplina, sacrificio) y los valores predominantes en la generalidad de los ciudadanos (individualismo, consumismo, bienestar). Ese divorcio se encuentra especialmente acentuado en nuestro país, en parte por razones históricas y en parte por la pasividad de las instancias oficiales para provocar un mayor acercamiento de la sociedad y las fuerzas armadas. En segundo término, se produce en España una sensación muy generalizada de que el servicio militar es una pérdida de tiempo, lo cual es además cierto en demasiadas ocasiones. En tercer lugar, las condiciones de habitabilidad de algunos cuarteles, la miseria que cobra nuestra tropa como soldada (poco más de 1.000 pesetas mensuales, el 2% del Salario Mínimo) y los casos de novatadas o abusos que aún se producen en algunas unidades hace que, en su conjunto, el servicio militar en España sea muy escasamente atractivo.

TABLA XIV

El espectacular crecimiento de la objeción de conciencia es en buena medida una expresión de ese fuerte rechazo social. La objeción se ve además favorecida por la creencia hoy generalizada entre los jóvenes urbanos y universitarios de que declararse objetor es, con mucha probabilidad de éxito, la mejor vía para evitar cualquier tipo de prestación personal al Estado. Esta situación se produce como consecuencia de la incapacidad del Gobierno para realizar una gestión eficaz de la Prestación Social Sustitutoria. La incapacidad tiene un doble aspecto: por un lado, la impotencia para hacer frente a la avalancha de solicitudes (hay ya más de 120.000 objetores en lista de espera y las plazas de PSS para 1994 no llegarán a las 35.000). Por otro, la imposibilidad de control para que la PSS fuera equiparable a lo que representa en dureza y exigencia personal el servicio militar. Estos dos factores están provocando que hoy muchos de los objetores puedan ser considerados más como "objetores de conveniencia" que de conciencia.

TABLA XV

TABLA XVI

La grave caída de la operatividad de nuestras Fuerzas

Armadas tiene una de sus causas fundamentales en la creciente inutilidad del servicio militar obligatorio. Esa creciente inutilidad está motivada por la excesiva reducción del tiempo de prestación (en los últimos diez años se ha reducido a la mitad), a la muy deficiente formación que recibe la tropa de reemplazo y a la carencia de medios materiales que padecen nuestros Ejércitos, con la consecuente disminución del adiestramiento. Además, habría que añadir la mala predisposición con que muchos jóvenes llegan a los cuarteles y bases militares como consecuencia de la presión social contra el servicio militar. El Almirante Vila, Jefe del Estado Mayor de la Armada, reconocía recientemente que "en nueve meses un marinero no aprende ni a defenderse a si mismo".

Todas estas deficiencias deberían haberse subsanado por un incremento del número de soldados y marineros profesionales. Sin embargo, el crecimiento de la tropa y marinería profesional está siendo excesivamente lenta como para compensar el deterioro del reclutamiento forzoso. Una unidad de élite ha tenido cubierta su plantilla de tropa profesional durante el pasado año en torno al 30 por 100, con un total de tan solo 910 paracaidistas frente a los 3.481 que teóricamente debería alcanzar. El total de tropa y marinería profesional es en estos momentos de 24.000, previendo terminar 1994 con 27.553. El principal problema con la tropa profesional no estriba, sin embargo, en el escaso número, sino en la mala distribución. Los soldados profesionales se encuentran dispersos en múltiples unidades, desempeñando en muchas ocasiones labores administrativas o de servicios, en vez de concentrarse en las unidades de combate.

TABLA XVII

El fenómeno de la insumisión es, en gran medida, un problema específicamente español y requiere un análisis diferenciado al de la objeción de conciencia. El insumiso es el joven que se niega a realizar tanto el servicio militar como la Prestación Social Sustitutoria por que considera que ambos forman parte de un mismo sistema militarista. Esta actitud plantea al menos tres cuestiones.

1) Con el actual Código Penal sería necesario meter en la cárcel de momento a casi 5.000 jóvenes por este delito, lo cual no sólo constituye un grave problema social y político sino también de saturación penitenciaria.

2) La interpretación y las condenas que diferentes jueces están imponiendo por este delito son absolutamente dispares.

3) No sancionar este fenómeno de ningún modo significaría que el número de insumisos se dispararía al alza.

Una alternativa a ese callejón sin salida aparente sería la despenalización de la insumisión y la sustitución de las penas de cárcel por sanciones de tipo administrativo (cerrar el acceso a la Administración Pública, retirada Carnet de Conducir, Licencia de Caza). Puede ser una vía a explorar, pero en principio plantea el problema de que el poder coercitivo contra los ciudadanos debe estar residenciado en los jueces y no en la Administración. En nuestra opinión, resulta muy complicado para el Estado obligar a hacer algo por la fuerza al conjunto de la sociedad cuando una parte muy importante de ella realmente no quiere hacerlo.

En cualquier caso, no parece sensata la actitud de esperar pasivamente a que la crisis del servicio militar se solucione por sí sola, el número de objetores termine por reducirse y el problema de la insumisión acabe desinflándose. La imprevisión y la falta de voluntad política para solucionar el problema tiene mucho que ver con la situación de crisis actual y, sino se toma algún tipo de medidas urgentes, en 1995 la proporción de objetores podría ser del 70 ó el 80 por 100 del contingente. Eso significaría la quiebra total del actual modelo y supondría la absoluta indefensión de nuestro país.

Las medidas que podrían adoptarse para salvar el actual modelo son caras económica y políticamente. En primer lugar, resultaría imprescindible modernizar, mejorar y hacer mucho más atractivo el servicio militar. Esto no pasa solo por mejorar la habitabilidad, la higiene, el ocio y la calidad de vida en bases y acuartelamientos, sino muy principalmente en generar la sensación en el soldado de que su servicio militar sirve para algo. Esto requerirá a su vez mejores programas de formación, más y mejor adiestramiento, más maniobras y ejercicios fuera de los cuarteles, mejoras en las dotaciones de material, todo lo cual resulta extremadamente costoso.

En segundo término, sería preciso endurecer de algún modo la actual Ley de Objeción de Conciencia, de forma que declararse objetor signifique algo más que rellenar un papel. Además, habría que dotar de más plazas a la PSS, endurecer sus condiciones hasta equipararlas a las del servicio militar y mejorar los mecanismos de control sobre la misma. Todas estas medidas serían tremendamente costosas. Finalmente, en la medida en que se quiera mantener el

servicio militar obligatorio debe mantenerse una posición de firmeza frente a la insumisión. Más allá del reclutamiento forzoso lo que la insumisión amenaza es la pervivencia del propio Estado de Derecho.

Una tercera alternativa sería un cambio en el modelo de fuerzas armadas que avanzase hacia un servicio militar voluntario y un ejercito enteramente profesional. El argumento para llegar a esta alternativa no está tanto en el incremento del número de objetores como en la creciente inutilidad que tiene el reclutamiento forzoso para constituir unas fuerzas armadas modernas. En cualquier caso, esta alternativa daría por añadidura solución definitiva a los problemas de la objeción y la insumisión. Plantea sin embargo el inconveniente de tener que realizar el difícil periodo de transición en un momento de profunda crisis económica y política.

5. La industria de defensa

La industria de defensa española atraviesa una crisis de enorme profundidad, hasta el punto de que la propia supervivencia del sector se encuentra hoy comprometida sino se toman medidas urgentes para su saneamiento y potenciación. El sector ha sido víctima en estos últimos años de una política industrial para la defensa inconsistente y errática.

La pervivencia del sector industrial de la defensa es un esencial para garantizar nuestros intereses nacionales. En primer lugar, la industria de la defensa es un elemento importantísimo de la defensa nacional. Garantizar la soberanía nacional exige una mínima autonomía e independencia en el mantenimiento de nuestros sistemas de armas y en los suministros esenciales a nuestras Fuerzas Armadas. En segundo término, un sector de defensa dinámico y competitivo significa una aportación muy importante al desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país, a la generación de puestos de trabajo y a la mejora de nuestra balanza comercial.

El desmantelamiento del sector defensa ha resultado especialmente acelerado dentro del proceso generalizado de destrucción de nuestro tejido industrial que está sufriendo nuestro país. Esta especial gravedad de la crisis en el sector defensa se debe a que a los muchos y graves problemas generales que sufre el conjunto de nuestra industria (rigidez del mercado de trabajo, elevados costes financieros, debilidad tecnológica, baja productividad, elevados tipos de cambio) hay que añadir para el caso del sector defensa una serie de problemas específicos especialmente negativos.

El proceso de destrucción de nuestra industria de defensa no puede compararse a la reducción que otros países europeos están realizando en sus respectivos sectores tras el final de la guerra fría. El sector industrial de la defensa en España no es comparable en su dimensión al de otras potencias Europeas. La participación de España en la producción de defensa comunitaria es casi insignificante. Tan solo una de las 35 mayores empresas de armamento de la Unión Europea se encuentra en nuestro país. Así, mientras que el Reino Unido y Francia produce cada uno el 33% del total comunitario, Alemania el 15,8 e Italia el 10,4, España produce tan sólo el 2,7 por 100. El problema de nuestro sector de defensa no es por tanto cuestión de "sobreproducción" como pueden tener otros países europeos,

sino de mera supervivencia.

Uno de los efectos más perniciosos de la política socialista ha sido la destrucción de empleo. Así, en sólo cinco años (1988-1992) se han destruido una tercera parte de los empleos directos del sector. El número de puestos de trabajo ha pasado de 31.211 trabajadores en 1988 a 21.391 en 1992, según datos de AFARMADE (Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa). Esto significa la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo. Aunque no tenemos datos precisos, creemos que la destrucción de empleo, lejos de disminuir, puede incluso haberse acelerado durante los años 1993 y 1994. La destrucción de empleo no afecta además únicamente a los subsectores con menor proyección de futuro, como pueda ser el de armamento y municiones, sino que ha atacado de manera muy intensa a todos los subsectores. Es más, el subsector de electrónica, uno de los que es previsible un mayor desarrollo en los próximos años, ha perdido en ese mismo periodo un 40% del empleo, lo que significa una pérdida diez puntos por encima de la media de todo el sector.

TABLA XVIII

La principal causa de esta dramática crisis se debe sin ninguna duda a la drástica caída experimentada en la demanda interna. Así, las adquisiciones del Ministerio de Defensa en el mercado nacional se han reducido a una cuarta parte en esos cinco años, pasando de 211.035 millones de pesetas en 1988 a sólo 54.564 millones en 1992. Estos datos ponen en evidencia que la crisis de nuestra industria de defensa no se debe tanto a la disminución de nuestro gasto en defensa, la reducción del presupuesto fue en ese mismo periodo tan sólo del 3,12%, como al progresivo deterioro de la estructura interna del mismo, que prima cada vez en mayor medida el gasto administrativo y de personal y retrae las inversiones.

TABLA XIX

Paradójicamente, frente a la caída espectacular de las adquisiciones nacionales, es de destacar el fuerte incremento de las adquisiciones en el extranjero. Así, las compras externas siguen una evolución completamente inversa a la demanda interna, multiplicándose por cuatro en este periodo. Las importaciones se han incrementado de esta forma desde los 21.461 millones de pesetas comprados al exterior en 1988 hasta los 85.585 millones gastados en 1992. Este incremento pone claramente de manifiesto que el hundimiento de nuestra industria de defensa ha respondido más que a la escasez de recursos a una voluntad deliberada del Ministerio

de Defensa de marginar a nuestra propia industria. Por otro lado, las compensaciones obtenidas con estas adquisiciones han sido muy poco satisfactorias. La mayoría de ellas se han gestionado para empresas públicas, la mayoría en sectores ajenos a la defensa y su porcentaje de ejecución no ha sido completo.

La caída de la demanda interna tiene además un efecto negativo inmediato en la capacidad exportadora del sector, puesto que ningún país comprará un sistema de armas que no haya sido adquirido previamente por las Fuerzas Armadas del país del que es originaria la empresa. Así, las exportaciones del sector se habían reducido en 1991 en más del 40% con respecto a las efectuadas en 1988. Según datos de AFARMADE las exportaciones ascendieron en 1988 a 66.961 millones de pesetas, cayendo en 1991 a 39.190 millones. Aunque en 1992 existió una cierta recuperación de las mismas, no se aún a alcanzar el nivel de 1988.

TABLA XX

El principal error de la política del Gobierno en relación con el sector ha estado en la generación de falsas expectativas y en el incumplimiento sistemático de los compromisos alcanzados con la industria. Así, la demanda garantizada por la aprobación de las sucesivas Leyes de Dotaciones para las Fuerzas Armadas creó unas alentadoras expectativas de crecimiento en el sector. Esas expectativas indujeron a realizar importantes inversiones en tecnología y equipo productivo con el fin de capacitar a las empresas para satisfacer las expectativas de demanda generadas. La realidad fue que la Ley de Dotaciones se ha incumplido sistemáticamente y que en los últimos años las expectativas de crecimiento se han tornado en fuertes restricciones de la demanda en la realidad. El endeudamiento acumulado por estas empresas supone hoy un lastre añadido para su supervivencia.

TABLA XXI

La reducción experimentada por los fondos para investigación y estudios en las Fuerzas Armadas en los últimos años y la concentración de estos fondos en un número cada vez más reducido de programas llevará al sector a una creciente debilidad tecnológica, comprometiendo su capacitación para participar en futuros desarrollos de cooperación.

La industria de defensa en España es, junto con la italiana, la que presenta un mayor grado de estatalización en toda Europa. La propiedad estatal de la mayor parte del sector se ha incrementado además de forma muy notable en los últimos años. Así, mientras que en 1987 las empresas

estatales representaban el 51,93% del total de la producción, en 1992 ese porcentaje se había elevado hasta el 63 por 100. La titularidad pública de estas empresas hace que los ciudadanos debamos soportar año tras año pérdidas absolutamente desproporcionadas a la dimensión de algunas de estas empresas. Este es el caso de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que perdió en 1992 la cantidad de 9.118 millones pesetas y cuenta con unas pérdidas acumuladas de 34.373 millones de pesetas. El Grupo INDRA perdió por su parte otros 4.500 millones en el mismo año. Este elevado y progresivo grado de estatalización contrasta con una realidad europea en la que 24 de las 35 mayores empresas de armamento son privadas.

En definitiva, nos encontramos con un sector de la defensa en España extraordinariamente débil y reducido en el contexto europeo, que en los últimos cinco años ha destruido más de un tercio de sus puestos de trabajo, que factura al Ministerio de Defensa una cuarta parte de lo que hacía en 1988, que ha reducido notablemente su capacidad exportadora, que está siendo debilitado tecnológicamente y que presenta una tendencia de creciente estatalización. Es claro que, en estas condiciones, el sector está irremisiblemente condenado a una inexorable extinción.

Las posibles soluciones a esta grave crisis no son fáciles. Sin embargo, cualquier plan encaminado a una recuperación de nuestro tejido industrial de la defensa será inútil mientras no se produzca una cierta recuperación de la demanda interna de bienes de defensa. En segundo lugar, sería necesario una Ley de Programas que dotase de cierta estabilidad y fiabilidad a esa demanda. Esa Ley podría generar expectativas empresariales razonables. En tercer término sería bueno poner en marcha un programa de privatizaciones que aligerase el excesiva peso del sector público en el sector. Finalmente, serían necesarias varias medidas complementarias de apoyo a la exportación, programas de reconversión y diversificación en determinados subsectores y ajustar las actuales políticas de I+D y de Cooperación Internacional a la nueva situación económica y estratégica.

IV. COMPROMISOS POR ENCIMA DE LAS POSIBILIDADES

Las fuerzas armadas no son una entidad separada y distinta de la sociedad, sino que comparten, de manera condensada, todos los rasgos de ésta. En España no teníamos por qué esperar algo diferente. Y efectivamente, en un país donde desde sus más altas instancias se ha potenciado que cada cual viva de prisa y, peor, muy por encima de sus posibilidades, echando mano del crédito, la deuda, la picaresca o directamente la ilegalidad, los ejércitos también parecen haberse contagiado de los mismos males.

Primeramente, desde el lado gubernamental, esto es, de la definición de la política de seguridad y defensa española, se ha pasado de una filosofía reticente a admitir cualquier compromiso internacional con nuestros socios y aliados a una postura de que España esté presente en cuanto organismo de seguridad colectiva vea la luz. Amén de incrementar la contribución española en aquellos donde ya estábamos.

No creemos necesario traer a colación el giro histórico del Gobierno acerca de la OTAN que de aquel famoso slogan "OTAN de entrada no" ha llevado a nuestro país a una integración de facto, escondida tan sólo por la retórica del llamado "modelo español". Es verdad, formalmente no participamos en el planeamiento aliado, pero lo seguimos escrupulosamente; no tenemos representantes en los mandos, aunque los enlaces allí destacados cumplen esa función; no somos parte de la estructura militar integrada, pero desplegamos unidades navales en las flotas permanentes del Atlántico y la más recientemente creada del Mediterráneo ...

Tampoco parece requerido recordar la preferencia de nuestros responsables políticos por un sistema de seguridad de Europa por los propios europeos a través de la UEO en su doble vertiente de pilar europeo dentro de la OTAN y como brazo armado de la Unión Europea desde su vinculación al Tratado de Maastricht. Cuando la crisis de Agosto de 1990, el gobierno se escudó en las reuniones y decisiones de la UEO para justificar la presencia naval española en aguas del Mar Rojo. Y en gran medida, nuestra presencia en Bosnia se ha derivado de nuestra pertenencia a esta organización.

Pero hay más. A raíz de la cumbre franco-alemana de La Rochelle donde, en mayo de 1992, los líderes de ambas naciones acordaron expandir su experimento de brigada combinada hasta un nivel de cuerpo de ejército con unos 50.000 hombres, el presidente español -quien no había sido invitado a la reunión, sino posteriormente informado de la misma- se mostró partidario de que España participase en ese *Euroejército*.

Así, el pasado 22 de noviembre, el Ministro de defensa

Julián García Vargas comunicaba a sus aliados de la UEO el inicio de las consultas con Francia y Alemania para estudiar la contribución española a dicho cuerpo de ejército europeo. La propuesta de Madrid consistía, además de la presencia permanente de oficiales en el Estado Mayor, en la asignación de una brigada mecanizada, la número XXI.

Las razones de esta participación española son, cuando menos, difusas. Ni el Ministro, ni el Gobierno han sabido avanzar más allá de la ventaja de estar presente en un órgano que podría llegar a contribuir a la seguridad y la estabilidad de Europa.

En realidad, sumarnos a esta iniciativa de marcado carácter bilateral no se explica más que en el deseo de ser tomados en cuenta como una nación que hace todo lo que puede y sabe por la construcción europea. No importa que algunos pasos resulten contradictorios o carentes de sentido estratégico.

Porque ¿qué sentido militar tiene este cuerpo de ejército pesado en un momento de reforzamiento institucional de la UEO? Tres han sido las argumentaciones: en primer lugar, servir de estructura colectiva que compense una posible vuelta a la dureza por parte de Rusia. Pero esta misión olvida que si Rusia se convirtiera de nuevo en la URSS, 50.000 hombres no bastarían para compensar el desequilibrio convencional y, mucho menos, para servir de factor disuasorio frente al componente nuclear, del que carece el eurocuerpo; en segundo lugar, se ha señalado que esta fuerza podría actuar como fuerza de pacificación en zonas de crisis, algo que olvida la falta de consenso actual sobre dicho tipo de misiones, como evidencia el caso de Bosnia; finalmente, se ha apuntado a una actuación fuera de área, caso todavía más improbable ya que los alemanes siguen aferrados a su política de no participar en acciones fuera de sus fronteras a menos que sean misiones ONU y, sobre todo, porque el eurocuerpo, constituido por unidades pesadas, carece de la movilidad estratégica necesaria para desplazarse y mantenerse en una zona lejos de sus acuartelamientos.

En realidad, ¿quién puede encontrar necesario el envío de nuestros carros de combate a Estrasburgo si no es por razones meramente de juego diplomático y político? La posibilidad de que de una brigada se saltara a contribuir con una división entera no responde más que a estar presentes con un número de soldados que no ponga en ridículo nuestro esfuerzo ante países más pequeños, menos dinámicos y menos europeístas, como Bélgica, quien asigna al eurocuerpo

tantas tropas como el gobierno español.

Pero también es verdad que hay una realidad militar detrás de estos compromisos, la de nuestros oficiales, quienes, en tiempo de restricciones y recortes, ven garantizada la supervivencia de sus unidades gracias a su asignación a empeños internacionales. Es claro, quien tiene que poder desplazarse a Estrasburgo -o a cualquier otra parte- para ejercitarse en maniobras, contará con el personal y los recursos mínimos para poder hacerlo. En su día pueden verse obligados a marchar junto con sus colegas alemanes, franceses o belgas. Lamentablemente, quienes se quedan, las unidades que nada tienen comprometido en el exterior, como no salen en la foto no gozarán de los mismos recursos y atención.

El eurocuerpo es claramente uno de esos casos de salvación. Como también lo es la propuesta estudiada actualmente por el Estado Mayor Conjunto de participar en la creación de un cuerpo de ejército para el Mediterráneo, inspirado en la propuesta franco-italo-española de flota combinada para el Mediterráneo occidental, aunque esta vez de naturaleza exclusivamente terrestre.

Ciertamente, es difícil ver otra cosa en esta idea que no sean intereses corporativos. Pero la culpa no es de nuestros militares. Ellos sólo hacen lo que el gobierno les permite, intentar salvar cuanto pueden incorporándose a lo único que parece que se respeta en los presupuestos, los compromisos internacionales.

V. EL 'ESTIRAMIENTO ESTRATEGICO'

Hace unos pocos años, el profesor de la Universidad de Yale y autor del best-seller *Auge y Caída de las grandes potencias*, Paul Kennedy acuñó con notable éxito la frase "estiramiento estratégico" para diagnosticar los males que aquejaban a los EEUU a finales de los años 80. Para él, Norteamérica había contraído unos compromisos militares muy por encima de sus propias capacidades, lo que les estaba llevando a su ruina progresivamente.

Pues bien, adaptando el concepto de Paul Kennedy, podría decirse que las fuerzas armadas españolas sufren en estos momentos de un gravísimo "estiramiento estratégico". Esto es, los compromisos internacionales que tienen que atender a causa de la política gubernamental, les están suponiendo a nuestros ejércitos, paradójicamente, una merma de sus capacidades globales. O, si se prefiere, que por desenvolverse dignamente en cuanto rincón del mundo les envía el gobierno, se ven obligados a disminuir el nivel de operatividad de las fuerzas que se quedan en casa, la porción mayoritaria. Es más, la porción teóricamente encargada de defender nuestro suelo y nuestros intereses vitales.

Sólo sobre la base de un serio esfuerzo nacional se puede garantizar la seguridad, esto es, la libertad y la prosperidad. Sin embargo, el gobierno ha optado por una política decorativa: mostrar el pabellón nacional por doquier -incluso en Oriente Medio- sin que esa nueva y creciente presencia militar española en el mundo se haya visto acompañada de una mayor asignación de recursos. Simplemente se detraen y reasignan fondos de otras partidas consideradas menos relevantes.

Ahora, si como hemos visto, lo "menos relevante" toca a la operatividad de nuestros submarinos, a las patrullas de nuestras costas, a la modernización de los carros de combate, a las horas de vuelo de los cazas, al gasóleo para los mismos, a los equipos de comunicaciones, a la munición que se puede disparar, al número de ejercicios que se realizan, a las compras de nuevo material, cabe hacerse la pregunta ¿qué es lo verdaderamente relevante para la defensa de España?